pueden resultar muy severas, y ello se explica por el carácter moralizante que tuvo en cuenta el legislador al efectuar esta reforma al CP; toda vez que también se expidió una nueva ley de responsabilidades de los servidores públicos, ya que la anteriormente vigente (la de 1980) no pudo castigar este tipo de enriquecimientos, entonces llamados inexplicables, ambas reformas fueron precedidas de una modificación al título IV de la C, dedicada, como sabemos, a regular la materia de la responsabilidad de los servidores públicos.

VI. BIBLIOGRAFIA: *Proceso legislativo de la iniciativa presidencial de Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos*, México, Cámara de Diputados, 1983; *Proceso legislativo de la iniciativa presidencial de reformas al Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal*, México, Cámara de Diputados, 1983.

José BARRAGAN BARRAGAN

Enriquecimiento inexplicable. I. Se trata de un procedimiento de investigación para comprobar, si fuere el caso, que algún funcionario o empleado público se hubiera enriquecido notoriamente por encima de sus posibilidades económicas, que venía regulado en el c. II, bajo el título V, de la ahora derogada Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación, del Distrito Federal y de los Altos Funcionarios de los Estados, publicada en el *DO* del 4 de enero de 1980.

No es el enriquecimiento inexplicable un delito, ni una falta, ni siquiera es un ilícito. Es una simple investigación que puede llevar a cabo, de oficio o previa denuncia, el Ministerio Público federal o el Ministerio Público del Distrito Federal, si fuere el caso. La ley, en efecto, insiste en subrayar este carácter de simples investigaciones.

Y como acabamos de indicar, este procedimiento fue derogado por las nuevas reformas al título IV de la C (*DO* 28-XII-82), por la nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos (*DO* 31-XII-82), y por la consecuente reforma al CP, en donde este procedimiento de investigación se cambia y se transforma por un tipo penal expreso: el enriquecimiento ilícito.

II. Son susceptibles de ser objeto de esta clase de investigaciones por enriquecimiento inexplicable, de acuerdo a la mencionada ley derogada de 1980, todos los funcionarios y empleados de la federación y del Distrito Federal; los senadores y diputados al Con-

greso de la Unión; los altos funcionarios del Poder Judicial federal o ministros de la SCJ y los altos funcionarios estatales, como gobernadores y diputados.

Es decir, que se prevé claramente que el enriquecimiento inexplicable deberá tener un origen o una relación circunstanciada con el hecho de que se esté desempeñando o se haya desempeñado un cargo público, y en virtud de que se presume que ha habido una falta de probidad en el uso y manejo de los recursos del erario en beneficio o provecho personal.

Por extensión, entran como objeto de la investigación terceras personas, como los funcionarios del funcionario o empleado o cualesquiera otras personas que hubieran prestado sus nombres para escriturar o detentar bienes pertenecientes propiamente a dicho funcionario o empleado público. Sobre todo, se presume por ley que los bienes propiedad del cónyuge del funcionario o empleado, cualquiera que sea el régimen matrimonial, pertenecen a dicho funcionario, salvo prueba en contrario. De ahí que se le obligue también a manifestar sus bienes antes de tomar posesión de su cargo.

III. La materia sobre la cual recaerá la investigación está constituida tanto por bienes raíces, como por depósitos en numerario en las instituciones nacionales de crédito, por acciones y por bonos u otras formas semejantes, que estén hechas o registradas a nombre del funcionario o empleado sujeto a la investigación, o a nombre de terceras personas, como ya hemos indicado.

La investigación parte del presupuesto indispensable de que ha habido falta de probidad y, en consecuencia, la ley traslada la carga de la prueba en contrario al funcionario, quien, en efecto, deberá comprobar la legítima procedencia de los referidos bienes.

IV. La investigación se inicia bien de oficio o bien por denuncia. Es decir, que la ley reconoce la acción de oficio a favor del Ministerio Público federal y del Ministerio Público del Distrito Federal, al tiempo que reconoce la acción popular para que se puedan denunciar estos supuestos. En el fondo, se trata de una investigación sumamente difícil y enredosa, la cual prevé, por lo demás efectos demasiado simplistas, como sería la destitución del funcionario y, en su caso, la devolución de aquellos bienes cuya procedencia legítima no hubiera podido comprobar, a favor de la nación.

De hecho, durante los escasos meses que estuvo en vigor esta ley de 1980 se presentaron bastantes casos de enriquecimientos inexplicables, como sucedió con

el entonces gobernador de Coahuila, Flores Tapia; con Fausto Cantú Peña, director general del Instituto Mexicano del Café, y tantos otros que constituyeron verdaderos escándalos públicos, por haber sido acusados de haberse enriquecido inexplicablemente por varios miles de millones de pesos y, en realidad, el Ministerio Público sólo pudo comprobarles que eran ilegítimos bienes por algunos millones, de manera que fueron puestos en libertad, con la sola declaración de que tales bienes, los poseídos ilegítimamente, pasaran a la nación.

V. El procedimiento, pues, comienza con esa clase de investigaciones que realiza el Ministerio Público correspondiente. Y si de resultados de dicha investigación se presume que ha habido tal falta de probidad en el funcionario, entonces se le consignará al juez competente, ante quien se ofrecerán las pruebas y los testimonios relativos a la legítima procedencia de los bienes investigados. De manera que el juez, después de haber oído al interesado, procederá a la absolución o declaración de inocencia o hará, en caso contrario, la declaración de que dichos bienes pasen a formar parte del patrimonio de la nación, quedando firme la destitución en el cargo que hubiera venido ejerciendo.

La ley todavía aclara que cuando se trate de altos funcionarios de la federación deberá preceder una declaración del Senado para que se pueda destituir al funcionario, así como para que se pueda seguir el procedimiento ante su juez competente. Asimismo, se establece que tanto el juez como el Ministerio Público deberán atenerse a las previsiones del CFPP para los supuestos que estuvieran expresamente reglamentados por dicha ley.

VI. Cabe, además, indicar que, si al margen de la investigación propiamente de enriquecimiento inexplicable se descubriera algún ilícito penal, entonces el Ministerio Público deberá proceder a realizar la consignación correspondiente.

v. ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.

VII. BIBLIOGRAFIA: BARRAGAN BARRAGAN, José, *El juicio de responsabilidad en la Constitución de 1824*, México, UNAM, 1978; CARDENAS, Raúl F., *Responsabilidad de los funcionarios públicos; antecedentes y leyes vigentes de México*, México, Porrúa, 1982.

José BARRAGAN BARRAGAN

Enriquecimiento sin causa. I. Aumento producido en el patrimonio de una persona, a costa del patrimonio

de otra, sin que haya mediado causa que justifique el incremento del primero y el correlativo detrimento del segundo, y que obliga al enriquecido a indemnizar al empobrecido, hasta que ambos patrimonios queden en la situación anterior al enriquecimiento injustificado.

II. El antiguo derecho romano admitía dos fuentes de obligaciones: el contrato y el delito. La jurisprudencia consagró otras fuentes, para las obligaciones que nacían “como si fuera de contrato” o “como si fuera de delito”. El derecho justinianeo recogió estas nuevas fuentes, dándoles el nombre de “cuasi-contrato” y “cuasi-delito”. La *Instituta* de Justiniano incluye entre los cuasi-contratos: la gestión de negocios, la comunidad de bienes, la tutela y la curatela, la aceptación de la herencia y el pago de lo indebido. En el derecho francés, el Código Napoleón (a. 1370) retomó la doctrina de los cuasi-contratos. Pothier los describía como hechos permitidos que creaban obligaciones hacia otros, sin que mediara convenio entre las partes. También el derecho español instituye el concepto de cuasi-contrato. En México, el codificador de 1928 —inspirado en las ideas de Planiol y Josseland— desechó la noción de cuasi-contrato, dado que ésta engloba institutos jurídicos heterogéneos, que no tienen en común otra cosa que el ser fuentes de obligaciones. El CC consagra como fuentes autónomas de obligaciones al enriquecimiento sin causa (bajo el nombre de enriquecimiento ilegítimo) y a la gestión de negocios.

III. El CC legisla sobre el enriquecimiento ilegítimo en su a. 1882, con el carácter de fuente de obligaciones. Los fundamentos de esta obligación están inspirados en la equidad y en la justicia, “ya que a nadie le es lícito enriquecerse sin causa en detrimento de otro” (v. Gutiérrez y González, pp. 367 y ss.). Los elementos constitutivos del enriquecimiento ilegítimo son: 1) enriquecimiento de una persona; 2) empobrecimiento de otra; 3) relación directa entre uno y otro hecho, y 4) falta de causa para que ocurran.

El injustamente enriquecido debe indemnizar al empobrecido. La acción para reclamar judicialmente dicha indemnización, se conoce desde el derecho romano como *actio in rem verso*, o “acción de repetir”. Está legalada en el a. 26 CPC, según el cual se debe indemnizar en la medida del enriquecimiento. Es decir, esta acción tiene un contenido estrictamente indemnizatorio: no se puede reclamar más allá del incremento patrimonial producido.

Una de las formas que puede asumir el enriqueci-

miento ilegítimo es el *pago de lo indebido* (aa. 1883 y ss. CC). Se trata de la entrega, hecha por error, de una cosa que no se tenía el deber de entregar. La entrega debe ser de cosa cierta, mientras que el enriquecimiento sin causa en su forma genérica (a. 1882 CC) puede provenir de cualquier clase de conducta ajena, ya sea de una dación, como de una acción o de una omisión.

Se paga indebidamente cuando no existe deuda que saldar, o cuando se hace el pago a una persona distinta del acreedor. El pago debe ser hecho por error (a. 1883 CC), ya sea éste de hecho o de derecho.

El que ha recibido un pago indebido tiene obligación de restituir lo pagado. El CC. distingue varios supuestos, de acuerdo a la buena o mala fe con que hubiese obrado quien recibió el pago; este elemento subjetivo incide en la obligación de restituir: pura y simplemente lo pagado (a. 1883), con los intereses o los frutos (a. 1884 pfo. 1), respondiendo de los menoscabos sufridos por la cosa (a. 1884 pfo. 2), con derecho a reclamar los gastos de conservación y las mejoras (a. 1889), etc.

La acción para repetir lo pagado prescribe al año, contado desde que se conoció el error que originó el pago. Pero, transcurridos cinco años desde que el mismo se realizó, se pierde el derecho a reclamar (a. 1893 CC). Este plazo constituye una caducidad ilegal.

IV. BIBLIOGRAFIA: GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto, *Derecho de las obligaciones*; 2a. ed., Puebla, Cajica, 1965; BORJA SORIANO, Manuel, *Teoría general de las obligaciones*; 7a. ed., México, Porrúa, 1974.

Carmen GARCIA MENDIETA

Enseñanza, v. EDUCACION.

Enseñanza del derecho. I. Enseñanza es la acción y efecto de enseñar, y también el sistema y método de dar instrucción. La enseñanza jurídica sería la acción de enseñar el derecho, y enseñar es simplemente: instruir, doctrinar, amaestrar con reglas y preceptos. En otras palabras, la enseñanza del derecho es la transmisión de los conocimientos que engloban esta materia.

II. El derecho ha sido el vehículo para la ordenación de la vida social en sus diferentes manifestaciones. A través del derecho se prohíben o autorizan conductas, se fijan atribuciones a los órganos del Estado y a sus funcionarios, se regulan las relaciones entre los países, se establecen reglas para las relaciones comerciales, se

fijan sanciones para los sujetos que incumplen las normas jurídicas, etc. En este orden de ideas la enseñanza del derecho puede ser la transmisión del conocimiento de las normas de carácter jurídico que existen en una sociedad dada. Pero puede ser también la transmisión de las reflexiones que sobre las normas jurídicas, los principios que las inspiran, sus defectos, su contenido, etc., han realizado los juristas en distintas épocas. Finalmente, la enseñanza del derecho también puede ser la transmisión del conocimiento sobre los órganos que aplican las normas, el modo en que se administra justicia, las diferencias que hay entre una y otra legislación, uno y otro sistema jurídico, y una y otra época en relación a todos los temas señalados y otros muchos. Para decirlo en forma breve, la enseñanza del derecho es la acción de transmitir el conocimiento de todo lo que significa derecho en un momento dado.

Ahora bien, la enseñanza se apoya en la investigación que sobre esta materia se efectúa. En realidad, enseñanza e investigación no pueden ser explicadas a manera de compartimentos estancos, ya que se hallan estrechamente vinculadas, la enseñanza se nutre de la investigación, la cual a su vez es la base de la primera. Sin embargo, la finalidad de una y otra sí ha sido distinta a lo largo del tiempo. A saber, la enseñanza tiene por objeto la capacitación de un número más o menos amplio de sujetos (alumnos) para actuar, dentro de la estructura social, en las diversas funciones que requieren del conocimiento del derecho. Por su parte, la investigación tiene por objeto realizar una labor indagadora o analítica sobre el fenómeno jurídico en su más amplia acepción.

A lo largo de la historia se han dado dos modelos distintos de enseñanza: el escolar y el artesanal. El primero se basa en la elaboración de textos o de instrumentos con los que se procura que el alumno desarrolle un máximo de habilidades o tenga el mínimo de conocimientos necesarios para el ejercicio de la actividad profesional que va a desempeñar. Tal fue el modo de enseñar de los sofistas, los retóricos, los romanos del bajo imperio, la escolástica y nuestras facultades y escuelas contemporáneas.

El segundo, o sea el artesanal, es la enseñanza de una actividad o profesión a través de la práctica cotidiana de las mismas. Este modelo implica la existencia de un maestro que domina la actividad o profesión que debe ser aprendida y que transmite sus conocimientos en forma directa y particularizada a sus, por lo general, escasos alumnos. Este modelo estuvo pre-

sente en la academia platónica y el liceo aristotélico. Fue también el que utilizaron los jurisconsultos romanos hasta el siglo I d.C. y el que se usó en la universidad alemana decimonónica.

El modelo escolar está destinado a atender a un número mayor de sujetos, en tanto que el artesanal sólo es posible aplicarlo a unos pocos individuos.

III. La enseñanza del derecho como la concebimos actualmente comenzó a darse en la llamada etapa posclásica del derecho romano. Anteriormente del conocimiento jurídico se había venido transmitiendo en la forma que aquí se ha denominado artesanal. Durante la etapa clásica de la jurisprudencia romana ya existían escuelas, que podríamos llamar informales, para la aprehensión del conocimiento jurídico: la proculiana y la sabiniana. Sin embargo, sólo después de que la jurisprudencia clásica agotó su fase eminentemente creadora fueron fundándose escuelas destinadas específicamente para la transmisión del conocimiento jurídico. Estas escuelas se crearon en Berito, Constantinopla y Roma, alrededor del siglo III d.C.

La acción del transmitir el conocimiento de las normas de carácter coactivo es muy antigua en la historia del mundo occidental. Ya en la Grecia clásica se habían desarrollado tanto el modelo escolar como el artesanal para la transmisión del conocimiento en general. No sabemos en qué medida estos modelos fueron utilizados para la transmisión del conocimiento jurídico específicamente; pero sabemos que la reflexión filosófica abarcaba temas de contenido jurídico, y que, por otra parte, los órganos de la administración de justicia eran complejos y las funciones de los sujetos involucrados en ella eran especializadas. A partir de estos dos hechos podemos inferir que ambos modelos pudieron haber sido utilizados para la transmisión del conocimiento, en este caso, jurídico.

En los primeros tiempos de la República romana el método dialéctico, utilizado por los griegos, comenzó a ser empleado para la indagación en torno a los fenómenos que se planteaban en la práctica jurídica. Poco a poco, en la medida que los romanos ampliaban su influencia en el Mediterráneo, se fue diversificando el mundo del derecho.

La reflexión e investigación que fueron realizando los juristas romanos desde los tiempos de la República tardía, y a lo largo del Principado, sobre los casos concretos que se iban presentando, llevó a la jurisprudencia romana a una etapa de madurez a lo largo del siglo I d.C., fecha en que comenzaron a aparecer las

primeras “escuelas de derecho”. La madurez de la jurisprudencia se había logrado a través de una importante labor desarrollada por muchas generaciones de juristas que se desempeñaban en diversas actividades. Una vez alcanzado este punto de su desarrollo, cesó la labor creadora (aunque por supuesto no por completo) y comenzó la labor de síntesis y sistematización.

Al lado de los hechos antes descritos comenzó a perfilarse otro fenómeno, el de la burocratización del imperio. A partir del siglo II las necesidades de la administración fueron cada vez mayores y en muchos cargos se hacían necesarios sujetos con conocimientos jurídicos. Así, la actividad de los conocedores del derecho se fue diversificando. La burocracia requería de la presencia de hombres que tuvieran conocimientos básicos sobre el derecho, aunque ignoraran las sofisticaciones a que habían llegado los juristas clásicos.

De esta manera, por un lado se dio la divulgación de los resultados de la jurisprudencia clásica, y por el otro, se hacían necesarios cada vez más sujetos conocedores del derecho; la conjunción de ambos elementos es quizá la causa de que sea, precisamente durante el siglo III, cuando se fundaron escuelas de derecho en tres de las ciudades más importantes del Imperio: Berito, Constantinopla y Roma.

En el momento en que se hizo necesaria la capacitación de un número cada vez mayor de sujetos iniciados en el conocimiento del derecho, declinó el modelo artesanal, el cual había venido siendo utilizado hasta entonces para la transmisión del conocimiento jurídico. En su lugar, el modelo escolar se volvió dominante, ya que, de hecho, no desapareció el artesanal.

Sin embargo, la enseñanza conforme al modelo escolar apenas se encontraba en pañales, y aunque hubo escuelas de derecho, éstas tuvieron poca importancia y categoría. Habría que esperar casi siete siglos para que se produjera una verdadera explosión en la necesidad de la transmisión del conocimiento jurídico. En la época moderna, esta necesidad surge nuevamente, vinculada a la centralización de poder y de la administración de justicia.

La gran labor de síntesis ya se había producido, y fue recogida por Justiniano, en el siglo VI d.C., en el cuerpo de derecho que después se llamó *Corpus Iuris Civilis*, éste fue el conjunto de textos que sirvió de base para el aprendizaje del derecho en las universidades europeas que se fueron creando a partir del siglo XII.

IV. Hasta entonces habían sido utilizados el método dialéctico y el escolástico para la transmisión del

conocimiento jurídico. En las universidades europeas se generalizó el uso de este último. Al igual que en Berito y Constantinopla, en Bolonia, Salamanca o París la transmisión del conocimiento jurídico se desarrollaba en lugares específicamente destinados a ese fin, conforme a un plan preestablecido, con un horario fijo para atender a las lecciones y un mínimo de requisitos a cubrir a fin de obtener el reconocimiento de que se sabía “el derecho”. Antes de que esto ocurriera, entre los siglos VI-XII, el método para la transmisión del conocimiento jurídico había sido, otra vez, el artesanal. En los monasterios se conservó la rica tradición cultural de siglos anteriores y se enriqueció con la reflexión filosófica sobre materias muy variadas.

La formación de los estados nacionales no llevó aparejados cambios espectaculares en la manera de transmitir el conocimiento jurídico. En todo caso, se diversificó y amplió el contenido de los planes de estudio. Así, al lado del *Corpus Iuris Civilis* comenzaron a explicarse, conforme al método escolástico, los derechos de cada uno de los estados en formación. Esto supuso un gran enriquecimiento en el contenido de los planes de estudio, ya que comenzaron a estudiarse diversos aspectos del derecho que fueron constituyéndose como ramas separadas. La mayor parte de estas materias debían su independencia a la cada vez mayor importancia del Estado. Así surgieron el derecho constitucional y el administrativo, la teoría del Estado, el derecho político y otras ramas. La mayor intervención del Estado en todos los aspectos de la vida social y la generalización del fenómeno codificador llevaron a la ampliación de las materias civil, penal, procesal, mercantil y otras. Poco a poco el derecho romano fue quedando relegado.

V. Por lo que toca a la enseñanza del derecho en nuestro país, y dejando de lado el modo en que se desarrolló en la época prehispánica, puede afirmarse que siguió de cerca los modelos implantados en las universidades europeas. El patrón fue el de la de Salamanca, y, en todo caso, sólo se realizaron algunas modificaciones impuestas por la realidad social y económica. En la Facultad de Leyes de la Real y Pontificia Universidad de México, fundada en 1551 para que los naturales y los hijos españoles “fuesen industriados en las cosas de nuestra santa fe católica y en las demás facultades”, y en algunos colegios mayores, se enseñó el derecho romano contenido en el *Digesto*, *Codex* e *Instituciones*. El derecho canónico era enseñado en la Facultad de Cánones, al igual que en Europa.

Hacia la segunda mitad del siglo XVIII la enseñanza del derecho en Europa sufrió algunas modificaciones que no parecen haber penetrado en la Universidad de México. En algunos países europeos la filosofía aristotélica comenzó a ser sustituida por la cartesiana, al lado de la cual jugó un papel importante el empirismo. Al amparo de estas ideas se fue conformando una corriente filosófica denominada iusnaturalismo racionalista. Entre los objetivos de esta corriente estaban: el estudio del derecho natural, y la enseñanza de los derechos creados en cada una de las monarquías o reinos, es decir, se sustituía la enseñanza del derecho romano por la del derecho local creado por el rey y sus órganos delegados. Asimismo, se buscaba la introducción en los planes de estudio de disciplinas económicas, preparación para la práctica y derecho público.

En México esta corriente logró romper con la tradición colonial en la enseñanza del derecho desde las primeras décadas del siglo XIX, y aunque la Universidad funcionó en forma intermitente antes de su clausura en 1865, otras instituciones se ocuparon de la transmisión del conocimiento jurídico. Entre ellas ocupa un lugar muy importante la Escuela de Jurisprudencia fundada en 1867. En las décadas anteriores funcionaron diferentes colegios e institutos de diversa denominación, pero con fines idénticos: la transmisión del conocimiento jurídico.

A lo largo del siglo se modificaron varias veces los planes de estudio para dar cabida a nuevas disciplinas, el modelo a seguir fue, en buena medida, el de la universidad napoleónica. Este modelo también era escolástico, y de hecho funcionó hasta que recientemente se han tratado de introducir nuevas técnicas para la transmisión del conocimiento jurídico. Entre ellas vale la pena destacar el Sistema de Universidad Abierta y la introducción de métodos audiovisuales. Ambos, buscan solucionar el problema de la escasez de catedráticos en una universidad de masas. Por otra parte, también pretenden aprovechar los nuevos medios técnicos que se utilizan en otras disciplinas para impartir conocimientos.

VI. Si bien el modo de transmitir el conocimiento jurídico no ha sufrido grandes variantes desde la época del bajo imperio romano hasta ahora, en el contenido de los planes de estudio sí se han reflejado, a lo largo de este amplio periodo, las modificaciones que ha venido sufriendo el pensamiento tanto político como de otra naturaleza. Por lo que se refiere a nues-

tro país, este hecho puede ser percibido fácilmente si se comparan los diversos planes de estudio que se han utilizado desde la independencia hasta nuestros tiempos. Así, en algunas ocasiones se puso el acento en los aspectos prácticos, otras veces la atención se centró en el terreno de la historia; en 1907 se dejó de lado el derecho romano para reincorporarlo después; recientemente se busca complementar la enseñanza teórica con la práctica y aprovechar las novedades de la técnica.

Por otra parte, ya desde el siglo XIX existieron diversas instituciones de apoyo a la docencia, en esa época debe destacarse la Academia de Jurisprudencia Teórico Práctica y en la actualidad los seminarios y la gran cantidad de asociaciones de profesionales del derecho que al lado de sus fines particulares buscan la mejoría académica de sus miembros.

Como se ha visto hasta aquí, desde el periodo bizantino se adoptó el modelo escolar para la transmisión del conocimiento jurídico y no parece posible sustituirlo por otro, o volver al modelo artesanal, el cual es utilizado sobre todo en la investigación jurídica.

v. ABOGACIA, FACULTADES Y ESCUELAS DE DERECHO, INVESTIGACION JURIDICA.

VII. BIBLIOGRAFIA: BECERRA LOPEZ, José Luis, *La organización de los estudios en la Nueva España*, México, Editorial Cultura, 1963; COING, Helmut, "La facultades de derecho en el siglo de las luces (o de la Ilustración)", *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid*, Madrid, vol. XV, núm. 42, septiembre-diciembre de 1971; GARCIA LAGUARDIA, Jorge Mario y GONZALEZ, Ma. del Refugio, "Significado y proyección hispanoamericana de la obra de José María Alvarez", estudio preliminar a la ed. facsimilar de las *Instituciones de derecho real de Castilla y de Indias*, México, UNAM, 1982, t. I; MENDIETA Y NUÑEZ, Lucio, *Historia de la Facultad de Derecho*; 2a. ed., México, UNAM, 1975; PESET, Mariano y PESET, José Luis, *La universidad española (siglos XVIII y XIX). Despotismo ilustrado y revolución liberal*, Madrid, Taevs Ediciones, 1974.

Ma. del Refugio GONZALEZ

Entidades Federativas. I. Las entidades federativas son los estados miembros que integran parte del Estado federal. En otros estados se les denomina provincias o países.

II. El a. 43 de la C señala que México está integrado por 31 entidades federativas, a saber: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guana-

juato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

III. La característica esencial de una entidad federativa es que goza de *autonomía*, y la columna vertebral de ésta, se encuentra en que las entidades federativas se: i) dan su propia Constitución, la cual es la base y fundamento de toda la legislación local, y ii) reforman su Constitución, siguiendo los procedimientos que ella misma señala.

IV. La idea de autonomía es muy diferente de la de soberanía. Mientras, desde el punto de vista jurídico, soberanía es poder supremo e ilimitado; autonomía implica un poder jurídico limitado, se tiene un espacio de actuación libre, y al mismo tiempo, un campo que jurídicamente no se debe traspasar. Las entidades federativas son autónomas, pero están limitadas por la Constitución del Estado federal; empero, en su esfera de competencia, pueden organizarse con libertad, siempre que respeten los lineamientos que les marca la ley fundamental.

V. La Constitución del Estado federal señala en su a. 115 la estructura política esencial que las entidades federativas deben respetar. Esta es:

a) Los Estados deben adoptar la forma de gobierno republicano, representativo y popular.

b) La base de la división territorial y de la organización política y administrativa es el municipio libre, del que se dan sus lineamientos en el mismo precepto.

c) Los gobernadores no pueden durar más de seis años en el cargo. Es decir, la Constitución local puede señalar un periodo menor, o sea, dos, cuatro, etc., años, pero tiene que respetar el máximo apuntado en la Constitución general.

d) La elección de los gobernadores y de los diputados de las entidades federativas, debe ser en forma directa; es decir, es el pueblo quien elige a sus representantes sin necesidad de ningún intermediario o elector.

e) Los gobernadores electos en forma popular nunca pueden ser reelectos y tampoco pueden ocupar ese cargo con el carácter de interino, sustituto, provisional o encargado del despacho. Esta prohibición de reelección para los gobernadores responde a la misma idea de la prohibición absoluta de reelección para el presidente de la República. La historia constitucional mexicana ha llegado a la conclusión de que las reelecciones en este país son funestas, que cuando se ha de-

jado la puerta abierta a la reelección, los gobernantes se han perpetuado en el poder.

f) Los gobernadores, ya sea, sustituto, provisional, el designado para concluir el período en el caso de falta absoluta del constitucional o el interino, no pueden ser electos para el período inmediato.

g) El gobernador constitucional de un Estado, debe ser ciudadano mexicano por nacimiento, “nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección”. Es indispensable para ser gobernador, ser mexicano por nacimiento, y después de este requisito de carácter absoluto, es necesario satisfacer una de las dos posibilidades apuntadas: haber nacido en el Estado, o bien, tener residencia en el mismo no menor de cinco años antes del día de la elección. Estos requisitos responden a que la persona que va a ocupar tan alto cargo debe conocer y estar compenetrado de los problemas de la entidad federativa.

h) Las legislaturas locales deben integrarse con un número proporcional a los habitantes de la entidad, y se señala el mínimo de legisladores de acuerdo con la población: no menos de 7 diputados en aquellos Estados que no alcancen los cuatrocientos mil habitantes, no menos de nueve en los que su población exceda del número anterior, pero no llegue a ochocientos mil, y no menos de once, en aquellas entidades cuya población supere la última cifra apuntada. Ahora bien, el mínimo de legisladores señalados no quiere decir que las Constituciones locales no puedan mencionar un número mayor, lo único que la Constitución general persigue con apuntar los mínimos indicados, es que las legislaturas locales no sean tan pequeñas que resulte fácil controlarlas al gobernador.

i) Los diputados locales no pueden ser reelectos para el periodo inmediato. Los diputados suplentes pueden ser electos para el periodo inmediato como propietarios si no han estado en funciones de diputados, pero los propietarios no deben ser electos para el periodo inmediato como suplentes. Este principio es el mismo que opera a nivel federal, y su razón estriba en que la idea de no reelección es una de las bases del sistema político mexicano, aunque claramente se ha expresado que este principio rompe con la existencia de una tradición congresional y se desperdician los servicios de personas con experiencia y conocimientos.

Sin embargo, aunque son ciertas las objeciones anteriores, México, inspirado en su historia constitucional, opta en este aspecto por lo menos malo.

j) El ejecutivo federal y los gobernadores de los Estados deben tener “el mando de la fuerza pública en los Municipios donde residieren habitual o transitoriamente”.

k) El congreso local debe admitir el sistema de diputados de minoría, y en los municipios cuya población sea de 300,000 o más habitantes se debe introducir el principio de representación proporcional en la elección de los ayuntamientos.

VI. En la C se impone una serie de restricciones a las entidades federativas, así como *obligaciones* que deben cumplir y, en forma de ejemplo, podemos señalar: el a. 27 indica que el Congreso federal y los Congresos locales legislarán con el objeto de fijar la extensión máxima de propiedad rural, y para efectuar el fraccionamiento de los excedentes conforme a las bases que la propia ley fundamental establece; el a. 119 C ordena que cada Estado está obligado a entregar, sin ninguna demora, los criminales de otro Estado o del extranjero a las autoridades que lo soliciten, y el a. 121 C regla que en cada Estado se dará entera fe y crédito a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los demás Estados.

v. FACULTADES EN EL ESTADO FEDERAL.

VII. BIBLIOGRAFIA: CARPIZO, Jorge, *Estudios constitucionales*, México, UNAM, 1980; *id.*, *La Constitución Mexicana de 1917*; 5a. ed., México, UNAM, 1982; LANZ DURET, Miguel, *Derecho constitucional mexicano y consideraciones sobre la realidad política de nuestro régimen*; 5a. ed., México, Norgis Editores, 1959; SCHMILL ORDOÑEZ, Ulises, *El sistema de la Constitución mexicana*, México, Librería de Manuel Porrúa, 1971; TENA RAMIREZ, Felipe, *Derecho constitucional mexicano*; 18. ed., México, Porrúa, 1981.

Jorge CARPIZO

Entrega de la cosa. I. Conforme a los aa. 2237 fr. I y 2284 del CC la entrega de la cosa es una obligación del vendedor pero, en virtud de que, de conformidad con el a. 2014 del propio ordenamiento, en las enajenaciones de cosas ciertas y determinadas la transmisión de la propiedad opera por efecto mismo del contrato, sin necesidad de una translación o entrega, ésta es una obligación de todo enajenante.

II. La obligación de entregar una cosa comprende también la de entregar sus accesorios, salvo que lo contrario resulte del título de la obligación o de las circunstancias del caso, por lo que podemos señalar, como regla, que salvo la voluntad contraria de las partes se deben entregar con la cosa de acceso-

nencias y frutos naturales, no separados en el día en que se realizó la enajenación, así como los frutos civiles devengados después de la venta.

En cuanto a los medios de la entrega el legislador distingue la entrega real, jurídica o virtual. La entrega real recibe también el nombre de *traditio* o entrega material. La entrega jurídica consistirá en que, aunque la cosa no haya sido materialmente entregada, la ley la considera recibida por el comprador, hipótesis que opera en el caso del ofrecimiento y consignación legalmente hechos. La entrega virtual opera cuando por convenio el comprador acepte que la cosa vendida queda a su disposición y en este caso el enajenante que la conserve en su poder tendrá los derechos y obligaciones de un depositario.

Por lo que se refiere al lugar dónde debe realizarse la entrega, si se tratase de muebles, y no se hubiese convenido un lugar expreso, la entrega debe hacerse en el lugar en que se encontraba la cosa en la época en que se vendió; mas tratándose de inmuebles o prestaciones relativas al mismo la transmisión deberá hacerse en donde éste se encuentre (aa. 2291 y 2083 CC).

III. BIBLIOGRAFIA: BEJARANO SANCHEZ, Manuel, *Obligaciones civiles*, México, Harla, 1980; BORJA SORIANO, Manuel, *Teoría de las obligaciones*; 7a. ed., México, Porrúa, 1974.

José de Jesús LOPEZ MONROY

Epiqueya, v. INTERPRETACION JURIDICA.

Equidad. I. Del latín *aequitas-atis*, igualdad de ánimo. El antecedente histórico directo del concepto de equidad se encuentra en Aristóteles, quien habla de la *Epiqueya* como la prudente adaptación de la ley general, a fin de aplicarla al caso concreto. La equidad era para Aristóteles, en sí, una forma de la justicia.

Este concepto de Aristóteles ha perdurado a través del tiempo sin haber sido modificado en substancia. En la Edad Media los escolásticos consideraron la equidad, como un correctivo del derecho, correctivo indispensable para que el derecho no perdiese su fin auténtico.

En época moderna Lumia ha definido la equidad como el juicio atemperado y conveniente que la ley confía al juez. La equidad constituye el máximo de discrecionalidad que la ley concede al juez en algunos casos, cuando la singularidad de ciertas relaciones se presta mal a una disciplina uniforme. Lumia expone

que la equidad no debe confundirse con el mero arbitrio, porque esto significaría un mal uso por parte del juez de sus poderes; en cambio cuando decide conforme a equidad respeta aquellos principios de justicia que se encuentran recibidos por el ordenamiento jurídico positivo o que son compartidos por la conciencia común.

II. En el derecho mexicano, el a. 14 constitucional da lugar a la aplicación del criterio de equidad en los juicios civiles, al permitir que las sentencias de los tribunales se funden en la ley o en la "interpretación jurídica de la ley", la cual puede estar basada en criterios de equidad. A falta de ley aplicable, permite que la sentencia se funde en "los principios generales del derecho", abriéndose otra posibilidad para la aplicación del criterio de equidad.

III. BIBLIOGRAFIA: LEGAZ Y LACAMBRA, Luis, *Filosofía del derecho*; 5a. ed., Barcelona, Bosch, 1979; LUMIA, Giuseppe, *Principios de teoría e ideología del derecho*; trad. de Alberto Jardón, Madrid, Reus, 1978.

Francisco M. CORNEJO CERTUCHA

Equidad Impositiva. I. Uno de los principios característicos de un sistema tributario es el de la equidad impositiva, que significa gravamen igual a personas en igual situación y gravamen adecuado a personas en situación diferente.

II. En la práctica tributaria este principio se suele traducir en: la generalidad del gravamen, evitando la evasión y la defraudación fiscales; la aplicación uniforme de la legislación fiscal; la preponderancia de la imposición directa sobre la indirecta; la progresividad en el impuesto sobre la renta; la imposición a las ganancias de capital; la determinación adecuada del ingreso personal y la imposición progresiva sobre la riqueza, con frecuencia a través del impuesto sobre sucesiones y donaciones.

La equidad impositiva tiene dos aspectos fundamentales: la equidad horizontal y la equidad vertical. La primera implica generalizar todos los impuestos, evitando el fraude y la evasión. La equidad vertical conlleva la aplicación uniforme de la legislación fiscal en todo el territorio del país, significa también la preponderancia de la imposición directa sobre la indirecta, lo cual equivale a admitir la progresividad tributaria, ya que sólo los impuestos directos, esto es, los que gravan el ingreso y la riqueza, son susceptibles de

ser utilizados en el contexto de una política redistributiva. Debe aclararse que existe una corriente importante de la doctrina que niega la utilidad de clasificar los impuestos en directos e indirectos.

III. Un sistema tributario bien establecido implica la necesidad de utilizar impuestos directos e indirectos, aunque con preponderancia de los primeros. Los sistemas impositivos se han estructurado con base en el principio del beneficio o conforme al de la capacidad de pago. Con fundamento en el primero, que lo es además en un sentido histórico, cada persona debe contribuir a las cargas públicas en función del interés que para él supongan los gastos públicos. Este criterio ha sido ampliamente superado en el siglo XX, y ha sido sustituido por el principio de la capacidad de pago, según el cual cada persona debe pagar en función de sus facultades para afrontar la carga impositiva, evaluada en función de sus ingresos, de su riqueza o sus gastos con autonomía de los beneficios directos que se deriven para el contribuyente de la acción del Estado. Como referimos, el principio aplicable en el siglo XX es el de la capacidad de pago, desarrollado teóricamente desde el siglo XIX, y que se manifiesta a través de la progresividad en el sistema tributario.

IV. BIBLIOGRAFIA: FUENTES QUINTANA, Enrique, *Hacienda pública. Introducción, presupuesto e ingresos públicos* (notas de clase), Madrid, 1973; *id.*, *Hacienda pública y sistemas fiscales*, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1978; NEUMARK, Fritz, *Principios de la imposición*; trad. de José Zamit Ferrer, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1974; RETCHKIMAN, Benjamín, *Introducción al estudio de la economía pública*, México, UNAM, 1972.

Gerardo GIL VALDIVIA

Erario. I. Del latín *aerarius*, tesoro público de una nación, provincia o pueblo. Tesoro público es la masa de recursos monetarios y medios de pago que tienen una entidad pública, disponible para efectuar sus gastos.

II. En Roma el vocablo se utilizó para designar el tesoro del Estado, en tanto que *fisco*, derivado de *fiscus*, era el tesoro del soberano. Con el tiempo ambos términos fueron sinónimos. En Castilla también se le dio el nombre de *fisco* al tesoro de la casa real, y el de *erario* al tesoro público. Ambos vocablos actualmente son sinónimos.

v. FISCO.

III. BIBLIOGRAFIA: FLORES ZAVALA, Ernesto, *Elementos de finanzas públicas mexicanas; los impuestos*; 22a.

ed., México, Porrúa, 1980; GARZA, Sergio Francisco de la, *Derecho financiero mexicano*; 9a. ed., México, Porrúa, 1979.

Carlos VIDALI CARBAJAL

Error. I. En derecho penal, ausencia de conocimiento o conocimiento falso sobre los elementos requeridos por la definición legal del delito o sobre el carácter prohibido de la conducta en que éste consiste.

II. Ha sido tradicional distinguir, no ya sólo en el ámbito de lo penal sino en el de todo el ordenamiento jurídico, entre error de hecho y error de derecho, es decir, entre el que versa sobre las condiciones exigidas en el hecho y el que recae sobre la norma de derecho mismo. A esa distinción se ha asociado también tradicionalmente el aserto de que, mientras el primero excusa, no ocurre así con el segundo, conforme a la máxima prevaleciente por siglos en la legislación y en la jurisprudencia, de que la ley se presume conocida de todos y de que su ignorancia, por ende, no exime de su cumplimiento. Así, si el tipo de delito consistiera en tener cocaína, aprovecharía al reo el ignorar que el polvo blanco que detenta es cocaína, pero no el ignorar que tener cocaína es un delito. Tal distinción entre error de hecho y error de derecho se ha visto modernamente sustituida en el derecho penal por la más exacta de error de tipo y error de prohibición. En verdad, los elementos que integran el tipo objetivo suelen no ser solamente hechos sino también relaciones jurídicas, como la ajenidad de la cosa en el robo y el vínculo de parentesco en el incesto. A su vez, la equivocada apreciación de elementos de hecho suele hallarse en la base de un error acerca de lo prohibido, como acontece, p.e., en la errada apreciación de una situación de peligro que no es tal y que induce al agente a obrar o reaccionar de un modo en verdad no justificado.

Por lo que hace a sus efectos, no se discute que el error de tipo elimina el dolo. Si el agente ha incurrido en error inevitable o invencible, la eliminación del dolo no deja residuo punible alguno. Si el error se origina en haber dejado de observar el cuidado debido y la conducta se conforma a un tipo de delito imprudente previsto por la ley, a él ha de estarse.

Por lo que concierne al error de prohibición, la máxima *error juris nocet* ha quedado modernamente proscrita, por su manifiesta injusticia. También puede aprovechar al reo esta clase de error. Ahora bien, quienes piensan que el dolo incluye tanto el conocimiento

de los elementos del tipo objetivo como el de la antijuricidad, concluyen que el error sobre esta última elimina el dolo, con los mismos efectos antes indicados; exclusión de toda responsabilidad si el error es invencible, y subsistencia de responsabilidad a título de culpa si, siendo el error vencible, se dan los extremos de la imprudencia y el hecho está legalmente previsto como delito culposo. Quienes estiman, en cambio, que la conciencia de la antijuricidad no pertenece al dolo sino a la culpabilidad, entienden ésta eliminada si el error sobre la prohibición era invencible, y la ven disminuida si era vencible.

III. ¿Qué prescribe el derecho penal mexicano sobre esta materia? Tratándose del error de tipo, sus efectos son los antes indicados. Así surge *sub intelligenda* del CP y del Código de Veracruz, razonando sobre el alcance y contenido de la intención o dolo, y *expressis verbis* de lo dispuesto en el a. 44 del Código de Guanajuato. Por lo que atañe al error de prohibición, el CP parece ajustarse a la máxima *error juris nocet* al no aceptar la alegación y prueba del acusado en cuanto a que “creía que era legítimo el fin que se propuso” (a. 9, pfo. segundo, fr. IV). El Código de Veracruz, en cambio, regula los efectos del error de prohibición facultando al juez para mitigar la pena o imponer una medida de seguridad “cuando la conducta o hecho se realicen con ignorancia de que se encuentran regulados por la ley o por falsa apreciación de ésta, en virtud de error esencial e invencible” (a. 18). El de Guanajuato, por su parte, dispone en su a. 10 que “a nadie servirá de excusa la ignorancia de la ley penal”; pero dice más adelante, en el citado a. 44, que quien “suponga erróneamente la concurrencia de circunstancias que justificarían el hecho realizado” no tendrá responsabilidad alguna, a menos que ese error se deba a culpa, caso en el cual se le sancionará a tal título, cuando el hecho admita esa forma de realización.

IV. Aparte de estas dos formas principales de error, cabe mencionar aun la llamada *aberratio ictus*, el error en el objeto y el *dolus generalis*. La primera, también llamada *error en el golpe*, ello es, en la ejecución (se dirige el arma sobre quien se quiere matar y se marra el disparo matando a otro), no debe, según una parte de la doctrina, suscitar cuestión alguna, pues se quiso matar y se mató, cometiéndose homicidio doloso, al paso que para otra parte de la doctrina ha de conducir al castigo, en concurso ideal, por tentativa de homicidio y homicidio culposo, si se dan los extremos de la culpa respecto de la muerte acaecida. El segundo (la

acción se dirigió sobre un objeto creyéndolo otro diferente) excluye el dolo si los objetos no son equivalentes y lo deja inalterado si lo son, como si, respectivamente, se dispara sobre un animal creyendo que es un hombre o sobre una persona creyendo que es otra. El *dolus generalis* es un error sobre el nexo causal entre acción y resultado, en que éste se alcanza con un segundo acto cuando el autor suponía ya haberlo logrado (creyendo haber dado muerte a la víctima se la arroja al agua para ocultar el hecho, y en verdad muere ahogada). Baste aquí decir a este respecto que se han avanzado dos soluciones: homicidio doloso consumado, o bien, tentativa de homicidio en concurso real con homicidio culposo.

El CP entiende subsistente el dolo cuando se ha errado sobre la persona o cosa en que se quiso cometer el delito (a. 9, pfo. segundo, fr. V), lo que parecería resolver los casos de *aberratio ictus* y error sobre objeto equivalente en el sentido de un único delito doloso consumado. Así parecería prescribir también el a. 19 del Código de Veracruz.

V. BIBLIOGRAFIA: CARRANCA Y TRUJILLO, *naa.*, *Derecho penal mexicano; parte general*; 11a. ed., México, Porrúa, 1977; JESCHECK, Hans Heinrich, *Tratado de derecho penal*, Barcelona, 1981; JIMENEZ DE ASUA, Luis, *Reflexiones sobre el error de derecho en materia penal*, Buenos Aires, El Ateneo, 1942; WELZEL, Hans, *Das deutsche Strafrecht in seinen Grundzügen*, Berlín, Walter de Gruyter, 1969; ZAFFARONI, Eugenio R., *Teoría del delito*, Buenos Aires, Ediar, 1973.

Alvaro BUNSTER

Error civil. I. El CC lo considera como un vicio del consentimiento puesto que éste debe ser libre y consciente; deja de ser libre si ha sido arrancado por violencia y no es consciente si es resultado de un error. El error deja su nombre cuando se lo ha provocado el autor; pero si es resultado de maquinaciones o artificios, recibe el nombre de dolo o mala fe.

Tradicionalmente, el error es definido como una creencia no conforme con la verdad y puesto que la verdad fue definida como lo que es, el error sería lo contrario a la realidad objetiva. Puede decirse que el error es una dirección de la voluntad contraria al evento.

II. Se clasifica en error de cálculo y en error de hecho o de derecho. Asimismo, se dice que el error puede presentar tres grados de gravedad: el que impi-

de la formación del contrato, el que lo hace simplemente anulable y el que carece de influencia (error—obstáculo; error—nulidad; error indiferente).

El error de cálculo simplemente da lugar a que se rectifique. El CC. considera como vicio del consentimiento no sólo el error de hecho sino también el de derecho, estimando que en éste se da una falsa opinión de un contratante sobre una regla jurídica aplicable al contrato, que procede de una disposición de la ley o sobre su interpretación.

El error de hecho y de derecho invalida el contrato cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que contratan, si en el acto de la celebración se declaró ese motivo o si se prueba que por el texto y el contexto del contrato éste se celebró en el falso supuesto que lo motivó.

El legislador ha tomado en consideración tanto el error que proviene de uno de los contratantes como el que resulta de ambos, siempre que el error sea identificable a través del texto del contrato o de sus circunstancias, esto es, siempre que el error se haya declarado o exteriorizado.

El error obstáculo es aquel en el que ciertamente no hay vicio del consentimiento, sino que puesto que la voluntad de uno de los contratantes es diferente a la voluntad del otro, en realidad es una ausencia del consentimiento, impide la formación de contrato.

III. El error que ciertamente es motivo de una anulabilidad es, como hemos dicho, el que recae sobre el motivo determinante de la voluntad de los que contratan y, por consecuencia, en términos generales, recae sobre las circunstancias de hecho y no sobre la identidad de la persona. Si el contrato se hubiera hecho en consideración a la persona, esto es, si fuese *intuite personae*, como la donación o el contrato de prestación de servicios profesionales o ciertos casos de obra a precio alzado, la identidad o cualidades de la persona son fundamentales para que el contrato sea válido.

v. NULIDAD.

IV. BIBLIOGRAFIA: BRANCA, Giuseppe, *Instituciones de derecho privado*; trad. de Pablo Macedo, México, Porrúa, 1978; LUTZESCO, Georges, *Teoría y práctica de las nulidades*; trad. de Manuel Romero Sánchez y Julio López de la Cerda; 5a. ed., México, Porrúa, 1980; ORTIZ URQUIDI, Raúl, *Derecho civil (parte general)*, México, Porrúa, 1977.

José de Jesús LOPEZ MONRROY

Escalafón. I. Denominación más común de la lista de trabajadores adscritos a las unidades económicas de

producción de bienes o suministro de servicios y que por disposición legal o contractual, están clasificados según su antigüedad, méritos, capacidad o habilidades laborales.

Para algunos etimologistas *escalafón* proviene de *escala*, palabra que a su vez se hace derivar del latín *scala*, escalón. Pero no ha faltado quien considere que se trata de una adaptación de la locución francesa *échelle de fonds*.

Otra acepción de *escalafón*, puesto que se le vincula en su origen a diversas entidades corporativas, corresponde a la relación nominal de los generales, jefes y oficiales del ejército de tierra, de la armada y de la aeronáutica militar, con expresión de su grado y antigüedad en la milicia, considerada ésta como un empleo.

II. La LFT no contiene propiamente una definición técnica; sin embargo, si observamos los aa. del 155 al 160, principalmente, y el 273 en forma suplementaria, encontraremos los elementos típicos de todo ascenso o promoción laboral en los sistemas escalafonarios del mundo (v. también, aa. 47 al 66 de la LFTSE).

III. Los derechos de antigüedad de preferencia, de estabilidad en el ejercicio, de ascenso y de recibir capacitación se encuentran imbricados. Precisamente, en la protección de una serie de expectativas que derivan de ellos, el mecanismo escalafonario encuentra su razón y su sentido.

El cuadro general de las antigüedades de los trabajadores a que hace referencia la LFT en el a. 158, es un elemento fundamental para el escalafón; es decir, para que los puestos vacantes, definitiva o temporalmente, sean ocupados por aquellos a quienes en justicia corresponde, considerando sus méritos y su historial laborales.

Pero de donde resulta realmente fortalecida la institución escalafonaria es de la vinculación trascendente entre la estabilidad en el trabajo y el derecho al ascenso. Esto ha llevado a De la Cueva a decir, textualmente, que se hallan en una relación dialéctica, pues si la estabilidad es una base imprescindible para la posibilidad de los ascensos, este derecho es la desembocadura natural de aquélla, ya que una estabilidad estática terminaría en una frustración de la persona; en cambio, el ascenso realizado con base en los años de estabilidad, es uno de los aspectos esenciales del destino del hombre, que es un vivir para un ascenso constante en la escala social.

Un precepto, al a. 159 de la LFT, contiene importantes pautas para que todo sistema escalafonario equilibre adecuadamente las expectativas que deriven tanto del derecho de antigüedad como del de capacitación. En efecto, el pfo. primero, que toma en cuenta fundamentalmente a la antigüedad, precisa que las vacantes definitivas, las provisionales con duración mayor de treinta días y los puestos de nueva creación, serán cubiertos escalafonariamente por el trabajador de la categoría inmediata inferior, del respectivo oficio o profesión; la doctrina llama a este sistema “escalafón ciego”.

El pfo. segundo expresa, en cambio, que si el patrón ha cumplido con la obligación de capacitar a todos los trabajadores de la categoría inmediata inferior a aquella en que ocurra la vacante, el ascenso corresponderá a quien haya demostrado ser apto y tenga mayor antigüedad. Si, dado el caso, concurren aspirantes en igualdad de condiciones, se preferirá al trabajador que tenga a su cargo una familia; y, de subsistir la igualdad, al que, previo examen, acredite mayor aptitud.

En la circunstancia de que el patrón no haya dado cumplimiento a la obligación de capacitar a su personal, contenida en el a. 132 fr. XV de la LFT, la vacante se otorgará al trabajador de mayor antigüedad; y, en el caso de que dos trabajadores hayan presentado servicios durante el mismo lapso, el empleador deberá preferir al que tenga a su cargo una familia.

Cuando se trate de puestos de nueva creación para cuyo desempeño, por su naturaleza o especialidad, no existan en la empresa trabajadores con la aptitud y pericia necesarias, y que además no se haya establecido un procedimiento para tal efecto en los contratos colectivos, el patrón podrá cubrirlos libremente. Debe aclararse que los supuestos en que se apoya esta excepción se alejan cada vez más de la órbita patronal, en virtud de que los sindicatos están vigilantes de toda ampliación en la planta productiva y de que, en muchos casos, los puestos nuevos son sugeridos por los líderes gremiales o convenidos con ellos.

La LFT posibilita que en los contratos colectivos, de acuerdo con el a. 392, se establezca la organización de comisiones mixtas para el cumplimiento de determinadas funciones sociales y económicas. La comisión mixta de escalafón es una de las de más frecuente constitución, y su funcionamiento se delimita en un reglamento proyectado, formulado y aprobado en forma paritaria.

v. ANTIGÜEDAD EN EL TRABAJO, COMISIONES MIXTAS.

IV. BIBLIOGRAFIA: BUEN LOZANO, Néstor de, *Derecho del trabajo*, t. II *Derecho individual, derecho colectivo*; 4a. ed., México, Porrúa, 1981; CUEVA, Mario de la, *El nuevo derecho mexicano del trabajo*, t. I, *Historia, principios fundamentales, derecho individual y trabajos especiales*; 6a. ed., México, Porrúa, 1980; GUERRERO, Euquerio, *Manual de derecho del trabajo*, 10a. ed., México, Porrúa, 1979.

Braulio RAMIREZ REYNOSO

Escisión de procesos. I. Del latín *scissio-onis*, cortadura, división o separación.

II. Es la figura procesal contraria a la acumulación de procesos, pero que la presupone, pues sólo se pueden separar de un proceso inicial aquellos litigios que se habían planteado en forma acumulada. Consiste, pues, en la separación de uno o más litigios de un proceso, en el que inicialmente se había, o habían planteado, en forma acumulada al litigio que se seguirá sustanciando en el proceso inicial. Se trata de remitir a un proceso distinto, una cuestión litigiosa planteada originalmente en forma acumulada a una pretensión principal, o una cuestión sobrevenida con motivo de la sustanciación de ésta.

III. La escisión de procesos es un fenómeno que no ha sido contemplado en forma expresa y sistemática por la legislación procesal ni por la jurisprudencia mexicana. Sin embargo, de ella se han ocupado algunos sectores de la doctrina.

Pallares se basa en algunas ideas de Carnelutti (para quien la escisión se presentaba cuando en un proceso acumulativo resultaba conveniente separar uno de los litigios acumulados y someterlo a un proceso y una decisión distintos), así como de Alcalá-Zamora (quien en sus adiciones a la obra de Carnelutti, apuntaba varios ejemplos de este fenómeno en la Ley de Enjuiciamiento Civil española, y agregaba que como tales debían ser considerados “todos aquellos (aa. de la citada ley) que reservan a una de las partes el derecho a deducir una o más pretensiones en un proceso ulterior”) (p. 716).

Para Pallares, la escisión procesal “tiene lugar cuando de varias cuestiones litigiosas que se ventilan en un proceso, se aparta alguna de ellas para resolverla en un nuevo proceso” (p. 318). De acuerdo con este autor mexicano, la escisión de procesos tiene lugar en dos casos: 1) “cuando en un proceso acumulativo, en que se discutan varios litigios, la ley autoriza a que uno de dichos litigios se ventile en proceso diferente” y 2) “cuando en un proceso en que se controvierte

cuestiones litigiosas diferentes, la ley ordena que alguna de ellas se decida en juicio separado” (p. 317).

Como ejemplos de la primera hipótesis, el autor señala los dos casos siguientes: primero, en los juicios de quiebra, cuando se autoriza que las cuestiones sobre legitimidad y monto de los créditos se tramiten en juicios distintos y, segundo, en los juicios sucesorios, donde se autoriza a los presuntos herederos que hayan comparecido después de los plazos legales para la declaración de herederos, “para que las ventilen (sus pretensiones) en juicio ordinario”. Como ejemplos de la segunda hipótesis, indica los casos de los juicios ejecutivos y especial de desahucio, en los que las cuestiones distintas a la ejecutividad del título y a la procedencia del desahucio, deberán plantearse en juicio ordinario posterior.

Por su parte, Briseño Sierra sostiene que “la escisión no tiene sentido sino cuando las pretensiones son incompatibles, distintas las vías o diferentes las competencias. Si en un proceso ya iniciado, se descubre la incompatibilidad de pretensiones, con independencia de la posibilidad de que los respectivos procesos deban sustanciarse sucesivamente o puedan serlo simultáneamente, lo cierto es que se impone la separación. Y lo mismo cabe decir de la vía y la competencia, pero en el último caso, debe recordarse que no se trata del problema prejudicial que puede y debe ser unificado, sino de atribuciones resolutivas diversas que aun perteneciendo al mismo juzgador, exigen distinción de procedimientos” (p. 182).

v. ACUMULACION, DESAHUCIO, JUICIO EJECUTIVO, JUICIO SUCESORIO, PRETENSION, QUIEBRA.

IV. BIBLIOGRAFIA: BRISEÑO SIERRA, Humberto, *Derecho procesal*, México, Cárdenas Editor y Distribuidor, 1970, t. IV; CARNELUTTI, Francesco, *Sistema de derecho procesal civil*; trad. de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo y Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires, UTEHA, 1944, t. II; PALLARES, Eduardo, *Derecho procesal civil*; 2a. ed., México, Porrúa, 1965.

José OVALLE FAVELA

Escisión de sociedades. I. Según el *Diccionario* de la Academia de la Lengua, escindir quiere decir cortar, dividir, separar; *escisión*, viene de latín *scissio-onis* y significa cortadura, rompimiento. El origen latino de la palabra se conserva en el nombre de la institución jurídica en los idiomas romances: *escisión*, *cisao*, *scissione*, *scission*; en los Estados Unidos, según Co-

nard, se habla de *coporate division*, *coporate separation* y *divisive reorganization*, pero con mayor frecuencia se alude a la escisión con los nombres de tres de sus variedades: *split-up*, *split-off* y *sping-off*. Este autor considera preferible la locución francesa a la que corresponde igual grafía en inglés: *scission*.

La figura jurídica es aún desconocida en la legislación mexicana, así como en los derechos español (Duque), italiano (Simonetto), alemán, inglés y norteamericano (Conard); su reglamentación se introdujo por la Ley francesa de Sociedades Comerciales del 20 de julio de 1966 (aa. 371 y ss.), por la Ley de Sociedades Mercantiles de Argentina, núm. 19550 de 1972 (a. 88) y, después, en forma más amplia, por la Ley de Sociedades Anónimas brasileñas (núm 6404 del 15 de diciembre de 1976, aa. 229 a 234). La práctica corporativa desde hace tiempo conoce la institución, que fue reconocida en la jurisprudencia italiana a mediados del presente siglo (Apel. Génova, 9/II/56, *cít.* por Simonetto).

II. La característica del fenómeno consiste, realmente, en una división o separación de bienes y de actividades de una sociedad, que se transmiten a otra u otras, sin que se extinga la sociedad escindida, que sólo se desprende de bienes y derechos de su activo.

En esto estriba la diferencia fundamental con la fusión, en la que una o más sociedades se extinguen y otra subsiste (fusión por incorporación o por absorción), o bien todas las que se fusionan desaparecen para crear una sociedad nueva (fusión pura o fusión por incorporación) (Mantilla Molina). La fusión es una forma de concentración de empresas (varias mueren y sólo una subsiste o se crea, con los patrimonios y los socios de aquéllas); en cambio, la escisión es una forma de desconcentración, de especialización, de división: una sociedad madre engendra, a manera de partenogénesis, una o más filiales (Duque), o una o más sociedades ceden parte de sus activos y de las funciones a favor de otra, existente o que se crea, que habrá de especializarse en estas mismas actividades cedidas.

No obstante esa diferencia básica, en ambas figuras, fusión y escisión, hay elementos comunes, como que los dos son métodos de reorganización de sociedades existentes; que en los dos supuestos, inicialmente (es decir, con anterioridad a los fenómenos relativos), existen complejos patrimoniales (de cada una de las sociedades que se fusionan o que se escinden); que las sociedades que reciben los bienes de las que se

fusionan o de la que se escinde, entregan, a su vez, acciones o partes sociales a la sociedad que subsiste; que tanto en un caso como en el otro la sociedad que se escinde o las que desaparecen a virtud de la fusión, se disuelven, pero no se liquidan, y en fin, que las transmisiones tienen carácter universal y total (derechos y obligaciones). Por ello, en la doctrina se habla de que la escisión es una fusión al revés (Duque), que exactamente es lo opuesto a la fusión (Conard) y que se contiene implícitamente en ésta “por el necesario contraste y continuidad lógicos entre contrarios, ya que la una constituye la imagen especular de la otra” (Simonetto).

III. La escisión de sociedades constituye una práctica frecuente tanto en México como en el extranjero. Unas veces por motivos estrictamente económicos, como en los casos en que una gran sociedad quiera establecer sucursales o constituir nuevas sociedades filiales, en lugares distintos a aquel o aquellos en que opera (sometiéndose así a la política oficial de descentralización); o bien, cuando la gran empresa realiza varias actividades a través de diferentes divisiones, ramas o secciones, y quiere desprenderse de algunas de éstas, y concederles cierta independencia patrimonial o mayor autonomía administrativa; otras veces por razones fiscales, creando sociedades satélites que realicen actividades propias, pero relacionadas con las de la sociedad que escinde; p.e., atribuyéndoles ciertas funciones técnicas, contables, o administrativas, o vinculándose con ellas a través de arrendamientos financieros, de contratos de distribución o de “factoraje”. En ocasiones, la creación de nuevas sociedades puede derivar de conflictos entre los socios, p.e., porque un grupo mantenga la política de reinversión de utilidades, y otro, la de distribución de dividendos (Conard); o en sociedades familiares, cuando el padre quiera estimular o satisfacer los deseos de independencia de los hijos, creando sociedades que éstos controlen. Y los ejemplos y los casos que se presentan en la práctica de los negocios, son muy numerosos.

IV. Desde el punto de vista jurídico, en países como el nuestro en que la escisión no está reglamentada, para la satisfacción de dichas necesidades se acude a la constitución de nuevas sociedades, a las que la sociedad existente transmite por venta o arrendamiento, o mediante aportaciones en especie, bienes de su patrimonio, con el acuerdo del órgano competente, o bien, a virtud de poderes de los representantes legales. Puede,

inclusive, requerirse acuerdo de asamblea extraordinaria, cuando las transmisiones de activos, por su entidad, por la importancia o la naturaleza de los bienes o derechos, supongan o impliquen una modificación del objeto o fin de la sociedad; p.e., cuando en sustitución de esos bienes, que constituyan la totalidad o la casi totalidad de los activos, se recibieran acciones de las nuevas sociedades y que así se convirtiera la enajenante en una sociedad de inversiones o en una sociedad de control.

Sin embargo, esas soluciones a las que tiene que acudirse a falta de una regulación específica, no resuelven todos los problemas, ni satisfacen los diversos intereses que se conjugan en las sociedades, por lo que es de desearse que nuestra ley (como en 1934 se hizo con la fusión y la transformación de sociedades) siga el ejemplo de las legislaciones francesa y brasileña.

No se protegen, en efecto, plenamente, los intereses de los socios, quienes, en relación con la enajenación de bienes por la sociedad, dependen de decisiones del órgano de administración, o bien, de actos ejecutados por directores y gerentes generales; a este respecto, podría someterse la escisión al acuerdo de asambleas extraordinarias (aa. 372 y 383 de la ley francesa), conceder a los acreedores derechos de oposición como pasa en los casos de reducción del capital social, y a los socios disidentes el derecho de retiro (aa. 230 de la ley brasileña y 88 en relación con el 78 de la ley argentina). Además, la transmisión de bienes a otras sociedades, en forma de aportación, podría llevar a que las partes sociales o las acciones de esas sociedades, que recibiera la sociedad escindida, no quedaran en el patrimonio de ésta, sino que se entregaran a sus socios en proporción a su participación en el capital social (a. 229 pfo. 5o. de ley brasileña). Para Duque, p.e., es requisito del procedimiento de escisión que las acciones de las sociedades que reciben las aportaciones se entreguen a los accionistas de la sociedad enajenante o escindida.

En cuanto a los acreedores, las transmisiones o enajenaciones de bienes les afectaría, en cuanto que la sociedad escindida puede disponer de parte de su patrimonio (que no sea garantía de los acreedores, como sí lo es el capital social), sin intervención y sin protección de aquéllos, sobre todo si carecen de garantías específicas. A evitar esos males llevaría la adopción de un régimen legal en que se previera la responsabilidad solidaria de la sociedad adquirente con la enajenante

(aa. 385 de la ley francesa y 233 de la ley brasileña), o en el que se necesitara garantizar los créditos previamente (a. 88 en relación con el a. 83 pfo. 2o. de la ley argentina).

V. Por lo que respecta a las formas en que puede manifestarse la escisión, en las leyes y en la doctrina extranjera, la ley francesa distingue dos tipos, la *fusión-escisión* o *escisión total*, y la *escisión parcial o propia* (Roblot) (a. 371 pfos. segundo y tercero). Aquélla, supone la aportación total del patrimonio a la sociedad o sociedades existentes, o bien, a una sociedad nueva; ésta, aportaciones parciales.

En la práctica norteamericana, de acuerdo con Conard, también se distinguen la escisión total, a la que se denomina *split-up* y la escisión parcial, que puede ser una *split-off*, o una *sping-off*, según que el capital social de la escindida se afecte, o no se afecte. Se habla también de *sping-off* cuando “la sociedad *pre-existente* —la que se escinde— mantiene activos suficientes para distribuir como dividendos las nuevas acciones que adquiriera: si así se procede, los accionistas conservarán todas las acciones que ya tenían, más las que reciban de la nueva compañía”.

En Alemania, se habla de *Spaltung* y de *Aufspaltung*; pero en ambos casos, dice Conard, más que de instituciones propias del sistema, se trata de fenómenos exóticos (cfr. también Duque).

v. FUSIÓN DE SOCIEDADES.

VI: BIBLIOGRAFIA: CONARD, Alfred, “Fundamental Changes in Marketable Share Companies”, *International Encyclopedia of Comparative Law*, Tübingen, J.C.B. (Paul Siebeck), s.a., vol. XIII; DUQUE DOMINGUEZ, Justino F., “La escisión de sociedades”, *Estudios de derecho mercantil en homenaje a Rodrigo Uría*, Madrid, Civitas, 1978; LACERDA TEIXEIRA, Egbert y TAVARES GUERRERO, José Alexandre, *Das sociedades anonimas no direito brasileiro*, San Paulo, José Bushatsky, 1979, vol. II; OTAEGUI, Julio C., *Fusión y escisión de sociedades comerciales*; reimp., Buenos Aires, Ed. Abaco de Rodolfo de Palma, 1981; MANTILLA MOLINA, Roberto L., *Derecho mercantil; introducción y conceptos fundamentales, sociedades*; 20a. ed., México, Porrúa, 1980; ROBLÓT, René, *Traité élémentaire de droit commercial*, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1980, t. I; SIMONETTO, Ernesto, “Della società. Trasformazione e fusione delle società. Società costituite all'estero ed operanti all'estero”, *Commentario del Codice Civile*, a cura di Antonio Scialoja e Giuseppe Branca; ristampa, Bolonia, Zanichelli, 1968; VASSEUR, Michel, “Les fusions et les scissions de sociétés par actions”, *Etudes de droit contemporain*, Paris, Sirey, 1959.

Jorge BARRERA GRAF

Esclavitud. I. La esclavitud, desde un punto de vista jurídico, fue una institución del derecho de gentes, común a todos los pueblos de la antigüedad. Tanto los filósofos griegos como los juristas romanos del periodo clásico la aceptaron como tal, pero la pusieron en tela de juicio al considerarla contraria a los principios del derecho natural.

La esclavitud antigua fue un fenómeno concomitante de la conquista. Su desarrollo estuvo determinado por el empleo de las fuerzas productivas, al permitir el aprovechamiento del producto sobrante del trabajador. Esto, correspondió ya a una sociedad en vías de desarrollo que entendió el valor económico de conservar la vida del prisionero, aprovechándose de su trabajo.

II. Roma fue el primer pueblo conquistador del mundo occidental. Debido a ello, fue el que con mayor minuciosidad reguló el régimen jurídico de la esclavitud.

Durante la Roma arcaica, el esclavo fue considerado como cosa, esto es, objeto de derecho y no sujeto del mismo. Sin embargo a pesar del rigor con que fue tratado por el derecho, su vida se desarrolló en cierta forma placentera, considerándosele, de hecho, como un miembro más de la *domus* romana.

Gracias a la esclavitud, el desposeído —cualquiera que fuese la causa— encontraba junto al dueño los medios necesarios para sobrevivir, y este último aumentaba su producción con el trabajo del esclavo. Sistema útil para ambas partes.

Pero Roma no se convertirá en una verdadera sociedad esclavista sino hasta mediados de la época republicana (a partir del siglo II a.C.) cuando, como resultado de las grandes conquistas, el trabajo de los esclavos pasó a ser la base de la economía del país.

La enorme acumulación de esclavos, en esta época, hizo disminuir su valor económico. Por otra parte, la heterogeneidad étnica de los mismos y los malos tratos de que fueron objeto por parte de sus amos, al perder contacto directo con ellos, trajeron como consecuencia varias sublevaciones que culminaron con el levantamiento antiesclavista más famoso de la historia, encabezado por el gladiador tracio Espartaco (73 a 71 a.C.), quien hizo estremecer las simientes del Estado romano. Este se vio entonces en la necesidad de dictar una serie de medidas tendentes a mejorar la situación del esclavo. Así creó una legislación proteccionista que caracterizó varios siglos de la Roma imperial, y que complementó el tradicional principio romano del *fa-*

vor libertatis. Sin embargo, a pesar de la lucha de Espartaco, la esclavitud se mantuvo, ya que no se habían dado las condiciones necesarias para que la revolución pudiera triunfar. La economía romana respondía todavía a un basamento de tipo esclavista.

Otro factor que condicionó la esclavitud romana en esta época fue la sumisión a esclavitud por conquista de la población helénica, con un grado de cultura y civilización superior a la romana. Debido a ello, y a pesar de que el esclavo siguió considerándose jurídicamente como “cosa”, intervino de hecho, y en gran medida, en la vida cultural y mercantil de la Roma imperial.

Posteriormente, en la Roma del Bajo Imperio, por una serie de causas que se conjugaron en un momento dado, principalmente la falta de conquistas y la influencia del cristianismo (nueva ideología igualitaria), el régimen esclavista entró en un periodo de descenso que culminó con su paulatina desaparición.

Otras formas de servidumbre (la *gleba*) que sometían el hombre a la tierra, le sucedieron en la época medieval.

A pesar de que en la antigüedad clásica la esclavitud había sido una forma sustancial de producción y un medio económico efectivo, la organización peculiar del alto medioevo no pareció necesitar de ella. Pero nunca desapareció del todo la tradición legal que la esclavitud había creado.

III. En la época de los grandes descubrimientos y de la iniciación de la expansión europea en el mundo (siglo XV), la esclavitud estaba envejecida. Fue la conquista de América la que le dio nuevo sentido a esta antigua forma de dominio del hombre por el hombre.

España, principal país descubridor y conquistador, contó desde muy temprano con disposiciones tendientes a controlar jurídica y económicamente la esclavitud. El Código de las Siete Partidas (1256-65) de tradición romanista, fue uno de los antecedentes legislativos más importantes en la construcción de un cuerpo de leyes relativas a los esclavos africanos en las posesiones coloniales del Nuevo Mundo.

Hay que distinguir, para una mejor comprensión de la esclavitud en la América española, entre la esclavitud de los indígenas o naturales y la de los negros o africanos.

IV. Desde los inicios de la conquista (por Real Cédula de 20 de junio de 1500), se condenaron las actividades esclavistas de Cristóbal Colón, y la corona española decidió otorgar a los indios la calidad de hombres

libres y vasallos del reino de Castilla. Aunque durante casi medio siglo se discutió sobre la condición jurídica de los naturales, ya desde los primeros años se había desechado la idea de someter a éstos a la esclavitud. Para ellos se crearon otros tipos de sumisión con fines más complejos: el repartimiento y la encomienda, así como una legislación proteccionista que caracterizó todo el periodo colonial.

Sin embargo, se admitió que podían esclavizarse los indios cautivos en “justa guerra” y para ello, en la primera mitad del siglo XVI, se redactó el célebre requerimiento de Palacios Rubios. Mediante él, los indios eran compelidos formalmente a aceptar la dominación y en caso contrario podían ser reducidos a esclavitud. Pero al amparo de esta excepción se cometieron tales abusos, que en 1530 se decretó que los indios cautivos no podían esclavizarse, ni aun en los casos de guerra justa, aunque cuatro años después se restableció el anterior principio esclavista. Sin embargo, este principio fue restringiéndose paulatinamente en la legislación y la doctrina, y, en definitiva, en las Leyes Nuevas de 1542 y en la Recopilación de Leyes de Indias de 1680 se estableció que sólo podían ser sometidos a esclavitud los indios caribes, los naborías, los araucanos y los mindanaos, que fueron siempre rebeldes a la corona española.

En la Nueva España, al margen de estas disposiciones, prevaleció durante un tiempo la costumbre *contra legem* de exportar a los indios del Pánuco como esclavos a las Antillas.

Desechada la idea de someter a los indígenas a esclavitud, apareció como solución laboral la importación de esclavos de raza negra.

En contrapunto a la política proteccionista relativa a los indios, la legislación española mostró una total indiferencia con respecto al esclavo africano. La corona se limitó a regular el desarrollo del comercio negro, acentuando su interés en la percepción de derechos y participaciones en el negocio, sin preocuparse por mejorar la suerte o aliviar el trato del esclavo. De esta manera, la prohibición de introducir esclavos negros en Indias sin autorización real, tuvo principalmente objetivos fiscales, políticos y económicos. Sin embargo, voces de clérigos se alzaron durante el siglo XVI en contra del comercio negro. Fray Domingo de Soto, fray Bartolomé de Albornoz y, tardíamente, fray Bartolomé de las Casas, son prueba de ello. En la centuria siguiente, Alonso de Sandoval —verdadero

apóstol de los negros— y Pedro Claver, lucharon también en ese sentido.

A diferencia de la esclavitud romana, cuya fuente fundamental fue la conquista, la esclavitud americana se basó en el comercio —la trata de negros.

En un primer periodo, la introducción de esclavos a Indias se llevó a cabo a través de *licencias*, permisos concedidos por el rey a los particulares para introducir una cantidad de esclavos previamente autorizada.

En los siglos XVII y XVIII predominó el sistema de *asientos*. Estos eran verdaderos contratos de derecho público a través de los cuales el particular o una compañía se comprometían, durante un determinado plazo (entre cinco y nueve años), a introducir cierto número de esclavos, en los puertos americanos, mediante abono de derechos estipulados. El *asiento* constituyó el punto de partida para una verdadera expansión comercial de las naciones comprometidas en el tráfico de esclavos. Fueron los portugueses, holandeses, franceses e ingleses los que se ocuparon principalmente de este comercio. Tanto fue el auge del comercio negrero en el siglo XVIII, que su regulación entró en la órbita diplomática y se llegaron a realizar tratados internacionales para regularlo entre España y los demás países europeos. Sin embargo, los intereses insaciables de los asentistas, los fraudes frecuentes que se cometían, el intenso contrabando que se desarrolló detrás de estos asientos internacionales y las magras compensaciones que recibía la corona española, hicieron que en la segunda mitad del siglo XVIII el comercio negrero fuera objeto de nuevas reformas.

Así, se inició un tercer periodo en que españoles y extranjeros tenían libertad de tráfico para esta actividad. La razón fundamental para adoptar esta medida fue la creciente necesidad de mano de obra agrícola e industrial, correspondiente en gran medida a las reformas económicas impuestas por los reyes de la casa de Borbón.

El régimen legal del esclavo negro estuvo regido por lo dispuesto en las Siete Partidas y por otras disposiciones aisladas de la legislación indiana que quedaron posteriormente integradas en Recopilación de 1680.

Sólo al final del siglo XVIII se estableció un verdadero estatuto regulador de la esclavitud (Código Negro) a través de una real cédula de 31 de mayo de 1789. En ella se establecieron medidas que denotan la preocupación, tardía por cierto, de la corona española, por aliviar la condición social y laboral de los

negros. Sin embargo, las protestas de hacendados y esclavistas provocaron su suspensión en 1794. En este texto legal, de efímera vigencia, se encontraban disposiciones relativas a la alimentación, vestido, descanso y diversiones, asistencia en caso de enfermedad e invalidez y adecuación de las labores del esclavo a la edad y el sexo.

El trato dispensado al esclavo negro varió en las distintas regiones del imperio español. Fue más severo en las explotaciones mineras de Perú y la Nueva España, y en algunas industrias antillanas, principalmente en la azucarera.

V. Ya hemos visto cómo desde el siglo XVI la esclavitud contaba con apasionados detractores. Más tarde en 1639, el Papa Urbano VIII condenaba la trata negrera y el Papa Benito XIV repetía esa condena en bula de 1741. A finales del siglo XVII eran muchos los misioneros que predicaban en África contra la esclavitud y su comercio. Por otra parte, el siglo XVIII fue particularmente rico en literatura antiesclavista y en proposiciones para mejorar la condición jurídica y real de los negros en todo el continente americano. Por último, el pensamiento libertario y crítico de la ilustración influyó también en las colonias españolas en este sentido.

Todo esto halló favorable repercusión en el espíritu de las primeras juntas al comienzo de las luchas independentistas hispanoamericanas.

A pesar de que la campaña abolicionista se había visto representada en las Cortes de Cádiz en 1811, la C gaditana de 1812 no hizo ninguna declaración referente a la esclavitud. La tibieza española con respecto a la abolición de esta institución frente a las presiones de la Gran Bretaña y la Santa Sede, abiertamente antiesclavistas, puede explicarse por las constantes peticiones de los empresarios cubanos para que España no se comprometiera en una política antiesclavista. La metrópoli no podía dejar de escuchar la voz de la más importante región de su casi extinguido imperio en momentos de difícil política internacional. El comercio negrero subsistió en España y en sus restantes colonias hasta 1880.

En 1810 el cura Hidalgo proclama la abolición de la esclavitud en México. Después de consolidada la independencia (1821), la esclavitud fue definitivamente extinguida en 1829. En el transcurso del siglo XIX sucedió lo mismo en todas las nuevas repúblicas latinoamericanas.

Se mantendrían sin embargo viejas formas de sumi-

sión y aparecerían otras nuevas; pero la esclavitud en su acepción estrictamente jurídica había muerto ya en los albores de nuestro siglo.

v. ENCOMIENDA.

VI. BIBLIOGRAFIA: LENGELLE, M., *La esclavitud*, Barcelona, Oikos-Tau, 1971; MELLAFE, R., *Breve historia de la esclavitud en América Latina*, México, SepSetentas, 1973; ZAVALA, Silvio A., *Servidumbre natural y libertad cristiana*, México, Porrúa, 1973; *id.*, *Los esclavos indios en Nueva España*, México, El Colegio Nacional, 1967; VILA VILAR, E., *Hispanoamérica y el comercio de esclavos*, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, 1977.

Beatriz BERNAL

Escribanía, v. NOTARIADO.

Escritura. I. Del latín *scriptura*. En sentido amplio es el papel o documento en el que consta impreso algo; el papel con el que se justifica o prueba alguna cosa. Desde el punto de vista jurídico, es todo escrito o documento que se elabora con el fin de dejar constancia de algún acto jurídico.

II. Cualquier referencia a esta voz, necesariamente nos remite al concepto de forma, como elemento de exteriorización de los actos jurídicos y a la clasificación de éstos de acuerdo con su forma de solemnes, formales y consensuales.

Los actos jurídicos formales, según nuestra legislación, son los que para su validez deben celebrarse por escrito. El documento que contiene el acto jurídico así celebrado, puede tener el carácter de público o de privado dependiendo del hecho de haber sido otorgado, o no, en presencia de notario público o de algún otro fedatario. Así, son escrituras privadas las que, sin intervención del notario o de algún otro funcionario dotado de fe pública, hacen los particulares entre sí, con testigos o sin ellos. El acto jurídico podrá constar válidamente en escritura privada si la ley no exige su otorgamiento en escritura pública.

La doctrina reconoce que, en términos generales, la escritura privada tiene fuerza probatoria entre los contratantes y sus causahabientes; así desde su otorgamiento hace fe entre ellos, pero ni su fecha ni su otorgamiento en sí son oponibles a terceros, en sentido perjudicial, en razón de que las partes de común acuerdo podrían haber antedatado el documento en fraude de terceros.

El principio general que admite nuestro CC es el

consensualismo, expresado en los términos del a. 1832, diciendo que en los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos en que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades especiales, fuera de los casos expresamente designados por la ley. Es bien conocido el hecho de que esta regla general se ve derogada en la mayoría de los contratos regulados por el CC, los que para su validez deben ser otorgados por escrito, en la mayor parte de los casos, y varios de ellos deben constar en escritura pública.

Es importante señalar que si bien el CC no exige la forma escrita en todos los casos, hay otras normas que concurren para exigir que el acto conste en escritura, como requisito para atribuirle determinados efectos.

Así, la antigua Ley General del Timbre disponía que cuando un acto estuviera gravado por ella, debía constar por escrito. Esta exigencia de escritura no debía ser interpretada como un requisito de validez del contrato, sino exclusivamente como una obligación de hacer, a cargo del sujeto del crédito fiscal.

De manera semejante, el CPC dispone que en ciertos casos solamente podrán admitirse excepciones, como la novación y la transacción, cuando consten por escrito, y en algunos casos en escritura pública.

v. FORMA, FORMALIDAD Y CONSENSUALIDAD, INSTRUMENTO PUBLICO.

III. BIBLIOGRAFIA: ROJINA VILLEGAS, Rafael, *De-recho civil mexicano*, t. III, *Contratos*; 3a. ed., México, Porrúa, 1977, 2 vols.; SANCHEZ MEDAL, Ramón, *De los contratos civiles*; 5a. ed., México, Porrúa, 1980.

Miguel SOBERON MAINERO

Escritura social, v. SOCIEDADES CIVILES.

Escrutinio. I. Del latín *scrutinium*, reconocimiento y regulación de los votos en las elecciones.

Es el recuento minucioso de los votos emitidos en una contienda electoral para verificar el resultado de la elección, o bien el recuento de los votos emitidos por los miembros de un cuerpo colegiado como es el caso, entre otros, de las cámaras que integran el Congreso de la Unión, del Colegio Electoral y de la Comisión Federal Electoral.

II. En el procedimiento de escrutinio y de computación de votos electorales se debe seguir el siguiente

orden: elección de diputados por mayoría relativa, diputados electos por listas regionales, según el principio de representación proporcional, senadores y presidente de la República.

De conformidad al a. 194 de la LOPPE, para el escrutinio y la computación, en todos los casos, se deben observar las siguientes reglas:

I. Se enumerarán las boletas sobrantes inutilizándolas por medio de dos rayas diagonales con tinta;

II. Se abrirá la urna;

III. Se comprobará si el número de boletas depositadas corresponde al número de electores que sufragaron, para lo cual uno de los escrutadores sacará de la urna, una por una, las boletas, contándolas en voz alta, en tanto que el otro escrutador, al mismo tiempo, irá sumando en la lista nominal de electores el número de ciudadanos que hayan votado, consignándose en el acta final de escrutinio el resultado de estas operaciones;

IV. Se mostrará a todos los presentes que la urna quedó vacía;

V. Se tomará boleta por boleta y el primer escrutador leerá en voz alta los nombres en favor de los cuales se haya votado, lo que comprobará el otro escrutador;

VI. El secretario, al mismo tiempo, irá anotando los votos que el escrutador vaya leyendo, y

VII. Se contará un voto por cada círculo marcado, así como cuando el lector marque en algún lugar del cuadro que contiene el círculo o emblema del partido.”

De los aa. 195, 196 y 197 de la LOPPE se desprenden, asimismo, las siguientes reglas que se deben tener en cuenta durante el escrutinio:

“En la elección de diputados por representación proporcional mediante listas regionales, si el elector marca más de un círculo no se computará el voto” (a. 195).

“En el caso de la elección de diputados por mayoría relativa y de presidente de la República, cuando se marquen dos o más círculos contará el voto si los partidos cuyos círculos hayan sido marcados postulan al mismo candidato o candidatos. En este caso, el voto contará para los candidatos” (a. 196).

“En la elección de senadores, cuando se marquen más de dos círculos, contará el voto si los partidos cuyos círculos hayan sido marcados postulan al mismo candidato o candidatos. En este caso, el voto contará para los candidatos” (a. 197).

“Concluido el escrutinio y la computación de cada

una de las votaciones, se levantará el acta correspondiente conforme al modelo aprobado por la Comisión Federal Electoral, la que deben firmar, sin excepción, todos los funcionarios y representantes” (a. 199).

III. BIBLIOGRAFIA: PATIÑO CAMARENA, Javier, *Análisis de la reforma política*; 2a. ed., México, UNAM, 1981; EZCURDIA, Mario, *Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales: su mecánica electoral*, México, Reforma Política, Gaceta Informativa de la Comisión Federal Electoral, 1978; LOPEZ MORENO, Javier, *La reforma política en México*, México, Ediciones del Centro de Documentación Política, A.C., 1979.

Javier PATIÑO CAMARENA

Escuela ejidal. I. La escuela rural se encuentra profundamente vinculada, en los propósitos de la reforma agraria, a la atención social de los pueblos y comunidades de campesinos, ya que por ley está previsto el señalamiento en toda resolución dotataria de una parcela escolar, la cual será igual en extensión a las demás unidades objeto de repartición entre los ejidatarios y deberá destinarse para construir, en caso de inexistencia, la propia escuela, así como para la investigación, la enseñanza y las prácticas agrícolas de la escuela rural.

El a. 101 de la Ley Federal de Reforma Agraria determina la necesidad de que las escuelas rurales que no posean dicha parcela, tendrán preferencia absoluta para que se les adjudiquen las unidades de dotación que se declaren vacantes o para que se les incluya en las ampliaciones del ejido.

También se aclara que los productos que se obtengan de la explotación de la parcela escolar se destinarán a satisfacer las necesidades de la misma escuela y a impulsar la agricultura del ejido.

II. La escuela ejidal aparece, pues, como una institución peculiar del ejido, vinculada con éste y comprometida, no sólo respecto de la educación general de la población estudiantil, sino también respecto al desarrollo y progreso material del ejido. El legislador pretende aunar las actividades y operaciones agrícolas, sobre todo, del ejido, con las actividades de capacitación y aun de investigación, como garantía de superación de las clases campesinas.

La escuela ejidal se nos muestra, desde el punto de vista legislativo, en posición de privilegio, al asegurarse la posibilidad de que pueda allegarse sus propios recursos financieros para hacer frente con holgura a sus necesidades; para que pueda ampliar los programas

de educación básica, según los planes oficiales, con programas especiales de capacitación y de adiestramiento tecnológico en tareas y faenas agrícolas. En la realidad, sin embargo, no se han podido alcanzar estas previsiones de legislador, debido a la desorganización de los propios ejidos y a las vicisitudes de la política.

III. BIBLIOGRAFIA: CHAVEZ PADRON, Martha, *El derecho agrario en México*; 5a. ed., México, Porrúa, 1980; MENDIETA Y NUÑEZ, Lucio, *El problema agrario en México y la Ley Federal de Reforma Agraria*; 16a. ed., México, Porrúa, 1979; RUIZ MASSIEU, Mario, "Derecho agrario", *Introducción al derecho mexicano*, México, UNAM, 1981, t. II.

José BARRAGAN BARRAGAN

Escuelas artículo 123. I. Sistema de planteles de enseñanza primaria que por disposición constitucional y legal deben ser fundados y sostenidos por los propietarios de empresas agrícolas, industriales, mineras o de cualquier otro tipo de actividad, situadas fuera de las poblaciones, con el fin de que los trabajadores y sus hijos tengan acceso a los niveles educativos elementales.

II. La obligación patronal consistente en facilitar la educación básica de los obreros y de sus familiares proviene de la C de 1917. La fr. XII del a. 123 apartado "A", en especial, recogió ese deber y lo impuso a uno de los factores, precisamente por su ubicación en las relaciones de producción.

Las entidades federativas y el gobierno federal, no pudieron concertar sus esfuerzos para lograr el cumplimiento inmediato de la obligación educacional que beneficiaría al trabajador y a toda la comunidad que gravitaba en torno a los centros de trabajo. Sin embargo, un buen principio fue la precisión de ese deber en la LFT del 18 de agosto de 1931. Este ordenamiento, a través del cual se hacía objetiva en el nivel reglamentario la facultad exclusiva de la federación para legislar en materia laboral, recogió en la fr. VIII del a. 111, con el carácter de obligación patronal, la de "establecer y sostener escuelas elementales en beneficio de los hijos de los trabajadores, cuando se trate de centros rurales situados a más de tres kilómetros de las poblaciones, y siempre que el número de niños en edad escolar sea mayor de veinte"; luego agregaba, en un pfo. final, que "la educación que se imparta en esos establecimientos se sujetará a los programas oficiales de las escuelas de la federación, y los maestros

serán designados por las autoridades escolares federales"; para concluir que los sueldos no serían menores que los atribuidos a los maestros en las escuelas de igual categoría que sostuviera el gobierno federal. El patrón incumplido, según los términos del a. 677, sería sujeto de una multa "de veinte hasta cien pesos".

Dos preceptos más de la LFT de 1931 se relacionaban con el sistema "Escuelas Artículo 123". El 334, fr. VII, incluía a la Secretaría de Educación Pública entre las autoridades encargadas de aplicar las disposiciones en materia de trabajo. El 428 bis, más concreto, expresaba que correspondía a la propia dependencia del Ejecutivo federal, "la vigilancia encaminada a obtener que las obligaciones a cargo de los patrones, en materia educativa, se cumplan en la forma y términos prevenidos por esta ley".

Fue hasta el año de 1934 cuando la aludida Secretaría de Educación Pública, mediante la Circular núm. IV-4-15, fechada el 23 de enero, se hizo cargo plenamente de la operación de los planteles. La comunicación de referencia, dirigida a los inspectores generales, directores de educación e inspectores-instructores, daba "instrucciones suficientes y claras para organizar y consolidar el nuevo sistema de instituciones educativas de carácter primario que desde ahora se agrega a los federales ya existentes".

La Circular núm. IV-15-105, del 11 de abril de 1935, modificó los procedimientos para fundar las "Escuelas Artículo 123", determinó las obligaciones individuales de los patrones en la materia y estableció los mecanismos de los depósitos anticipados de los fondos que cada patrón debería entregar para el pago de sueldos a los maestros.

Otro importante documento es la Circular núm. IV-42-252 del 5 de octubre de 1935. Dicta las disposiciones que deben ser observadas en los casos de fraccionamiento de fincas rurales en los cuales procede la clausura de las "Escuelas Artículo 123"; dos motivos integran la primera de estas disposiciones:

- a) cuando desaparezca el patrón obligado a sostenerlas en cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, y
- b) cuando se reduzca a menos de veinte el número de niños escolares dependientes económicamente de los trabajadores de la finca o negociación que esté pagando a los maestros.

En el mes de diciembre de 1935 la Secretaría de Educación Pública resolvió un paquete de consultas turnadas por diversos patrones. De suma importancia fue la respuesta al planteamiento consistente en saber

si la obligación educacional de los propietarios de los centros de trabajo se hacía extensiva a los niños que no fueran hijos de los obreros. Transcribimos la parte conducente:

“El último fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionado con la asistencia de niños a las Escuelas Artículo 123, obliga a las empresas que sostienen esta clase de planteles a impartir educación a todos los niños en edad escolar, aun cuando no sean hijos de sus trabajadores.”

Posteriormente, el primero de junio de 1936, mediante la Circular núm. XIII-3-150, el secretario de Educación Pública determinó que la Dirección General de Enseñanza Primaria en los Estados, “es el organismo central que controla el establecimiento de las escuelas tipo Artículo 123 desde el punto de vista técnico”.

Dos datos que ahora resultan anecdóticos en función de las modificaciones introducidas en la política educativa del régimen cardenista, consisten en que para todo movimiento docente en las “Escuelas Artículo 123”, los profesores debían exhibir “comprobantes de su actuación relacionada con la lucha de clases y con la reforma educativa comprendida en el artículo 3o. constitucional”, y que sería hasta después de los doce primeros meses de servicios de los maestros de nuevo ingreso, cuando se expedirían “los nombramientos definitivos en favor de quienes hayan (hubieran) demostrado ampliamente su criterio social en materia educativa, actuando siempre en favor de las masas trabajadoras, y que con hechos hayan probado que están plenamente identificados con los problemas y los anhelos de los asalariados”. La Circular núm. IV-12-52, publicada el 15 de marzo de 1937, fue el vehículo para hacer del conocimiento de los inspectores generales y de los directores de educación lo anterior.

III. La LFT de 1970 incluye en el *tít. cuarto* (“Derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones”), *c. I* (“Obligaciones de los patrones”), a. 132, fr. XII, el deber patronal de “establecer y sostener las escuelas Artículo 123 Constitucional, de conformidad con lo que dispongan las leyes y la Secretaría de Educación Pública”.

Por otra parte, la propia LFT de 1970 reconoce como una de las *autoridades del trabajo y servicios sociales*, a. 523, fr. II, a la Secretaría de Educación

Pública. Esta determinación legal se refuerza cuando el precepto 526 señala que compete a dicha dependencia del Ejecutivo federal “la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones que esta Ley (LFT, 1970) impone a los patrones en materia educativa”.

IV. BIBLIOGRAFIA: COBOS, Bernardo, “Escuelas Artículo 123”, *Informaciones Sociales*, México, año 3, núm. 14, 1956; GONZALEZ DIAZ-LOMBARDO, Francisco Xavier, “El seguro social y la educación”, *El Foro México*, cuarta época, núms. 18-19, julio-diciembre de 1957; *Legislación sobre trabajo*, Ediciones Andrade, México, 1973.

Braulio RAMIREZ REYNOSO

Espacio aéreo. I. El espacio aéreo superestante al territorio de un Estado es el espacio que rodea directamente el globo terráqueo, espacio que está lleno, más o menos, del elemento aire. Para la Convención de Chicago, de 1944, es el “espacio atmosférico” que está encima del territorio de un Estado (a. 1o.).

II. La discusión acerca de la naturaleza jurídica y de las libertades del espacio aéreo se presentó a principios de este siglo, cuando se hizo realidad la navegación aérea. En sus comienzos hubo dos corrientes: los que sostenían el derecho de sobrevuelo de todos los Estados y aquellos que postulaban que el Estado tenía plena soberanía sobre su espacio aéreo. Puede afirmarse que la discusión anterior tuvo vigencia entre 1902 y 1913. Lo cierto es que para 1913 una convención entre Francia y Alemania reconoció la soberanía plena y exclusiva de cada Estado sobre su espacio aéreo y la libertad de paso inocuo de las aeronaves privadas de los Estados, por lo que éstos tenían soberanía plena sobre su espacio aéreo.

III. La Convención sobre Aviación, de París, de 1919; la Convención Iberoamericana, de Madrid, de 1926, y la Convención de Chicago, de 1944, reconocen los principios anteriormente mencionados. De acuerdo con la Convención de Chicago, el espacio aéreo forma parte del territorio del Estado subyacente, además de que ningún Estado puede reclamar soberanía sobre el espacio aéreo de los llamados espacios internacionales, como el alta mar. En la Conferencia de Chicago, de 1944, se adoptó también un Convenio sobre Transporte Aéreo Internacional, llamado de las cinco libertades. De acuerdo a su a. 1o., dichas libertades son: 1) de sobrevuelo sin aterrizaje; 2) de aterrizar para fines no comerciales; 3) de aterrizar para dejar correo, carga y pasaje, tomados en el país de la nacio-

nalidad de la aeronave; 4) de tomar correo, carga y pasaje para el país de la nacionalidad de la aeronave, y 5) de tomar correo, carga y pasaje de cualquier país contratante, con destino a cualquier otro país contratante.

Cabe mencionar que en la misma reunión de Chicago surgió la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), organismo especializado de las Naciones Unidas, encargado de uniformar las reglas de la navegación aérea y que tiene su sede en Montreal, Canadá. Otro de los aspectos fundamentales es que sobre la materia han prevalecido los tratados bilaterales, casi todos ellos hechos sobre el modelo de los principios trazados, en 1946, en las Islas Bermudas. Algunos instrumentos internacionales dignos de destacar en materia de navegación aérea internacional son: la Convención de La Habana, de 1928; la Convención de Varsovia, de 1929, que unifica ciertas reglas para el transporte de personas y carga; la Convención de Roma, de 1933, sobre daños a terceros en tierra; la Convención de Guadalajara (México) que complementa la de Varsovia, etc.

IV. BIBLIOGRAFIA: CHENG, Bing, *The Law of International Air Transport*, London, Stevens, 1962; MATEESCO, Nicola, *Droit aérien*; 2a. ed., París, Dalloz, 1963; *id.*, *De la mer territoriale à l'air territorial*, París, Pedone, 1965; MCNAIR, A.D., *The Law of the Air*; 3a. ed., London, Evans, 1964; OSMAŃCZYK, Edmund Jan, *Enciclopedia mundial de relaciones internacionales y Naciones Unidas*, México, Fondo de Cultura Económica, 1976; SEARA VAZQUEZ, Modesto, *Derecho internacional público*; 4a. ed., México, Porrúa, 1974; SEPULVEDA, César, *Derecho internacional público*; 6a. ed., México, Porrúa, 1974.

Víctor Carlos GARCIA MORENO

Espacio exterior. I. Se usan como sinónimos de espacio exterior, en castellano, las siguientes voces: espacio cósmico, espacio extratmosférico, espacio ultraterrestre, espacio sideral, entre otras. Existe un consenso: el espacio aéreo tiene un límite, es finito; pero lo que aún se encuentra sujeto a debate es dónde está dicho límite. Otra cosa es cierta, existe consenso también en relación a que donde acaba el espacio aéreo, cualquiera que sea el límite que se le fije, ahí comienza el espacio exterior. Es verdad que de acuerdo a la práctica internacional, los Estados limitan el espacio aéreo a la atmósfera misma.

II. Esta nueva rama del derecho internacional, aunque para muchos autores y es una disciplina autóno-

ma, nace en 1953, cuando el príncipe de Hannover, en ocasión de su tesis doctoral, en la Universidad de Göttingen, planteó una serie de cuestiones acerca del tema. De 1957 a 1958, se organizó el llamado "Año Geofísico Internacional". La Unión Soviética lanzó al espacio sideral en 1957 su primer *Sputnik*; casi a finales de ese año, puso en órbita un segundo *Sputnik* llevando a bordo una perrita llamada Laica.

En 1958 los Estados Unidos alistan su primer satélite. Ese mismo año la Asamblea General de la ONU trata el tema del espacio exterior, en cuanto a su uso con fines pacíficos, y constituye una comisión especial sobre la utilización pacífica del espacio exterior. En 1963, la Asamblea General de la ONU, aprobó la Resolución 1884/XVIII en la que se instaba a los Estados a no emplazar en órbita alrededor de la tierra ningún objeto portador de armas nucleares u otra clase de armas de destrucción masiva, ni emplazarlas en cualquiera de los cuerpos celestes.

III. Realmente el primer acuerdo internacional sobre el espacio exterior data del 27 de enero de 1967, mismo que lleva el nombre de "Tratado sobre los Principios Jurídicos que han de regir la Exploración y Utilización del Espacio Exterior, inclusive la Luna y otros Cuerpos Celestes". En ese mismo año se llevó a cabo, en Viena, la primera *Unispace* y a mediados de 1982, en la misma ciudad, se celebró la segunda. Otros acuerdos posteriores al de 1967 son: Acuerdo sobre salvamento y devolución de astronautas y restitución de objetos lanzados al espacio exterior, de 1968; Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños de objetos espaciales, de 1972; Convenio sobre registro de objetos lanzados al espacio exterior, de 1974; Tratado sobre la reglamentación de actividades de los Estados sobre la Luna y otros cuerpos celestes, de 1979, etc.

IV. Consideramos que el Tratado de 1967 es el fundamental sobre la materia, ya que contiene los principios básicos, mismos que pueden reducirse a tres: a) afirmación de un interés general de los Estados en la exploración y utilización del espacio exterior; b) la exploración y utilización deben hacerse en beneficio de todos los pueblos, y c) las actividades en el espacio exterior deben contribuir a la paz internacional. Otro acuerdo de suma importancia es el ya mencionado, que debe regir las actividades de los Estados en la luna y otros cuerpos celestes, adoptado por la Asamblea General de la ONU, el 5 de diciembre de 1979 y que consta de 21 artículos. También existen acuerdos bilaterales, sobre todo europeos, sobre acti-

vidades espaciales, y los relativos a las telecomunicaciones vía satélite con fines comerciales. En los últimos años, en los foros internacionales, se ha debatido el problema relativo a las órbitas geoestacionarias, es decir, la de los satélites que a una altura aproximada de 36000 kilómetros sobre el paralelo del Ecuador, guardan una posición de inmovilidad relativa con respecto a la tierra.

V. BIBLIOGRAFIA: OSMANČZYK, Edmund Jan, *Enciclopedia mundial de relaciones internacionales y Naciones Unidas*, México, Fondo de Cultura económica, 1976; SEARA VAZQUEZ, Modesto, *Derecho y política en el espacio cósmico*, México, UNAM, 1981; *id.*, *Introducción al derecho internacional cósmico*, México, UNAM, 1961.

Víctor Carlos GARCIA MORENO

Especificación. I. Modo de adquirir el dominio de una obra mueble hecha con materia ajena, indemnizando al propietario de la substancia empleada si la obra es adquirida por su autor, o indemnizando a éste, si la obra la adquiere el dueño de la materia.

II. La especificación, junto con la mezcla y la confusión, es una de las formas de la accesión respecto de cosas muebles.

El CC la legisla en sus aa. 929 a 931, dentro del c. IV (Del derecho de accesión), del tít. IV (De la propiedad). El codificador mexicano se refiere al valor de la obra como “mérito artístico” (aa. 929 y 930 CC). Es el caso, p.e., del escultor que toma un bloque de mármol de su vecino y elabora con él una estatua.

Para que el autor pueda quedarse con su obra, deben mediar dos circunstancias: 1) que haya obrado de buena fe (a. 929 CC), en este caso, sólo debe indemnizar el valor del material empleado. El contenido de la indemnización está dado por el a. 925 CC: la entrega de una cosa igual en especie y valor, o el precio de ella fijado por peritos, y 2) que el mérito artístico de la obra sea inferior a la materia, aunque el autor haya obrado de buena fe, la nueva especie será para el dueño de la substancia empleada, quien tendrá derecho —además— a la indemnización por los daños y perjuicios causados (p.e., quien usa una valiosa puerta ajena, de madera de hermosa veta, para realizar con ella una tosca talla). Al autor se le pagará el valor de la obra.

Si ha mediado mala fe en la apropiación de la materia, el dueño de la misma tiene derecho a optar entre quedarse con la obra sin pagar nada a su autor, o

demandar el valor de la substancia, más la reparación de los daños y perjuicios.

Las disposiciones citadas no dan pautas para establecer el “mérito artístico”. Este criterio es acertado, ya que el concepto de obra de arte y el gusto estético varían considerablemente con el tiempo. El juez tendrá amplias facultades para resolver, en caso de que se discuta el valor de la obra con respecto a la materia, convenientemente asesorado por peritos de la especialidad (a. 930, *in fine* CC). Apelando a la interpretación progresiva del derecho, debe entenderse que la expresión “mérito artístico” se aplica tanto a una obra de arte propiamente dicha, como a cualquier manufactura a saber, p.e., un aparato de uso técnico, una máquina de empleo industrial, un vestido.

III. BIBLIOGRAFIA: ROJINA VILLEGAS, Rafael, *Compendio de derecho civil*, t. II, *Bienes, derechos reales y sucesiones*; 10. ed., México, Porrúa, 1978; GOMIS, José y MUÑOZ, Luis, *Elementos de derecho civil mexicano*, t. II, *Derechos reales*, México, s.p.i., 1943.

Carmen GARCIA MENDIETA

Especulación. I. Del latín *speculatio*, de *speculari*, observar. Operación comercial que se practica con ánimo de lucro.

II. Se refiere a todas las actividades sobre mercaderías, títulos de crédito, o inmuebles cuyo fin primordial es el obtener un lucro, bien sea por la reventa o por la explotación que se haga de los mismos.

III. El término de lucro ha sido considerado por algún sector de la doctrina como la expresión o naturaleza de los actos de comercio.

Barrera Graf, dentro de la clasificación que propone de los actos de comercio, menciona a los actos de comercio por su motivo o fin, considerando a éstos como los típicamente comerciales, en atención a la finalidad o al motivo que alguna de las partes persigue en su realización.

Tres clases de actos, dice, integran este grupo: la primera comprende a los actos y contratos sobre muebles y sobre inmuebles, verificados con el propósito de especulación comercial; o sea, los que se regulan por las frs. I y II del a. 75 del CCo., y que son los que se refieren a la voz que se analiza.

Si los actos recaen sobre bienes muebles, se consideran como mercantiles tanto los traslativos de dominio, como los alquileres y todos aquellos contratos y operaciones análogas que no sean de naturaleza esen-

cialmente civil. Si se refieren a inmuebles, el derecho patrio limita el carácter comercial a los actos de enajenación y excluye, implícita, pero muy claramente, a los negocios no traslativos como el arrendamiento, a pesar de que ya existe jurisprudencia de la SCJ, reconociendo a los contratos de arrendamiento naturaleza mercantil, cuando éstos se refieren a especulaciones comerciales.

La LPC previene sanciones para los proveedores, que a través de propagandas fantásticas buscan obtener lucros excesivos. Así, el a. 5o. de dicho ordenamiento previene: "Es obligación de todo proveedor de bienes o servicios informar veraz y suficientemente al consumidor. Se prohíbe, en consecuencia, la publicidad, las leyendas o indicaciones que induzcan a error sobre el origen, componentes, usos, características y propiedades de toda clase de productos o servicios. . ."

En derecho bursátil, la especulación sobre los valores se encuentra reglamentada por la LMV, que contiene prohibiciones, p.e., para exponer a la venta ciertos títulosvalores, sobre la par, es decir, sobre el valor nominal de los mismos.

En términos generales, la especulación se encuentra controlada por la legislación mexicana, siendo dicho control una de las expresiones de la intervención estatal que día con día se va acrecentando.

v. ACTO DE COMERCIO, TITULOS DE CREDITO.

IV. BIBLIOGRAFIA: BARRERA GRAF, Jorge, *Estudios de derecho mercantil*, México, Porrúa, 1958; CAPITANT, Henry, *Vocabulario jurídico*, Buenos Aires, Depalma, 1973.

Miguel ACOSTA ROMERO

Espionaje. I. De espión y éste del italiano *spione*, espía. El espionaje pertenece a la constelación de figuras delictivas atentatorias de diversos bienes jurídicos que se plasman en torno de la idea de violación del secreto. En términos generales, él importa informarse de (intrusión o intromisión) e informar sobre (revelación) secretos políticos o militares relativos a la seguridad exterior de la nación.

II. El CP, sin embargo, no trata bajo el rubro de espionaje, sino en el de "traición a la patria", los tipos de acción u omisión que lo conforman. Estos tienen por sujeto activo al mexicano y consisten en: a) tener en tiempo de paz o de guerra relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjeros o darles

instrucciones, información o consejos para guiar una invasión del territorio nacional o alterar la paz interior; b) proporcionar dolosamente y sin autorización, en tiempo de paz o de guerra, a personas, grupos o gobiernos extranjeros, documentos, instrucciones o datos de establecimientos o de posibles actividades militares, y c) ocultar o auxiliar a quien cometa actos de espionaje, sabiendo que los realiza (a. 123, frs. VI, VII y VIII).

Podrá advertirse que en las dos primeras formas (la tercera es accesoria de ellas) el núcleo de la previsión es la acción de *revelar* (*dar* instrucciones, información o consejo; *proporcionar* instrucciones, documentos o datos), y de revelar *secretos*, pues no es dudoso que todo el material que se pone en conocimiento del extranjero es material precisamente de ese carácter. Trátase de conductas de una gravedad que explica su inclusión entre las formas de traición, que sólo puede cometer el mexicano, como viene a subrayarlo *contrario sensu* el a. 126. La pena es prisión de cinco a cuarenta años.

III. Frente a los anteriores, los tipos tenidos propiamente por el CP, como de espionaje y bajo ese rótulo, no conforman un sistema, y se presentan como de naturaleza muy disímil. Mientras el ocultamiento o auxilio proporcionado a sabiendas por un mexicano a quien comete actos de espionaje está entre las formas de traición del a. 123, como se ha visto, y comporta la severísima pena de prisión allí prevista, el delito omisivo del mexicano consistente en no hacer saber a las autoridades las actividades de un espía, de que tiene conocimiento, está castigado con seis meses a cinco años de prisión (a. 129). Se prevé en seguida, respecto también del mexicano, la conducta de contar con documentos o informaciones confidenciales de un gobierno extranjero y revelarlos a otro gobierno, con perjuicio de la nación mexicana (a. 128). Los demás tipos de espionaje conciernen al extranjero. El primero (a. 127, primer pfo.) corresponde casi exactamente a la primera forma de traición antes indicada (a. 123, fr. VI), y el segundo (a. 127, pfo. segundo) a la segunda (a. 123, fr. VII). El tercero (a. 127, pfo. tercero) impone de nuevo, esta vez al extranjero, la altísima pena de cinco a cuarenta años de prisión, cuando, declarada la guerra o rotas las hostilidades con México, tenga el extranjero relación o inteligencia con el enemigo o le proporcione información, instrucciones o documentos o cualquier ayuda que en alguna forma perjudique o pueda perjudicar a la nación mexicana.

IV. BIBLIOGRAFIA: CARRANCA Y TRUJILLO, Raúl y CARRANCA y RIVAS, Raúl, *Código Penal anotado*; 8a. ed., México, Porrúa, 1980; GONZALEZ DE LA VEGA, Francisco, *El Código Penal comentado*; 4a. ed., México, Porrúa, 1978.

Alvaro BUNSTER

Esponsales. I. Del latín *sponsales*, *sponsus*, esposo, mutua promesa de casarse. En la legislación mexicana se le define como un acuerdo previo de voluntades o promesa, realizado por escrito, con miras a la celebración de un futuro matrimonio (a. 139 CC). Doctrinalmente, se discute su naturaleza jurídica en virtud de que, a pesar de estar calificado por el a. 139 CC como un antecrédito, el a. 142 CC expresamente niega su obligatoriedad; disposición ampliamente justificada, pues de establecerse una obligación de contraer nupcias sería contraria a la libertad que deben tener las partes al momento de celebrar el matrimonio. Sin embargo, se le puede calificar de una hipótesis legal que supone una situación determinada, cuya ruptura por causas injustificadas constituye un caso específico de responsabilidad civil extracontractual, sancionado conforme a lo establecido por el a. 143 CC. Dicha sanción está constituida por el pago de los gastos que la otra parte hubiere hecho con motivo del matrimonio pactado y por una indemnización, fijada por el juez, a título de reparación moral por el daño que el rompimiento de los esponsales cause a la reputación del inocente.

Rojina Villegas apoya la tesis anterior considerando que existe un hecho ilícito sancionado por la ley cuando se violan los esponsales, lo que quiere decir que las consecuencias no se producen por lo esponsales en sí, sino por el hecho ilícito en que se incurre.

II. En el derecho romano casi siempre se realizaba un convenio entre los futuros cónyuges o entre los padres de éstos, en el que se comprometían a unirse en matrimonio; a esta promesa se le conoció como *sponsalia*, pues se realizaba por medio del *sponsio*, figura jurídico-religiosa mediante la cual se le daba valor jurídico a la palabra. Ulpiano definió los esponsales como la petición y promesa recíproca de futuras nupcias. Su incumplimiento originalmente daba lugar a una *actio ex sponsu*, mediante la cual se podía exigir jurídicamente su cumplimiento; en el derecho clásico los esponsales quedaron reducidos a una fórmula social que producía una cuasi afinidad con el matrimonio y, por lo tanto, constituían un impedimento para

contraer nupcias con un tercero mientras no se hubiere disuelto el vínculo.

En el derecho posclásico, influido por el cristianismo y por tradiciones orientales, los esponsales quedaron ampliamente regulados. La promesa se acompañó de las *arrha sponsalia*, costumbre que se encuentra ligada a la figura oriental del matrimonio-compra, transformándose en una garantía de la promesa y en pena para los casos de incumplimiento. Se podrían realizar desde los siete años de edad, teniendo como requisitos que las partes gozaran del *ius conubium*, dieran su consentimiento, contaran con el de sus padres y que no existieran impedimentos permanentes para contraer nupcias.

Originalmente, los esponsales en el derecho romano fueron indisolubles cuando se efectuaban por mutua estipulación; posteriormente, la disolución podía ser mediante el repudio, por mutuo consentimiento, por muerte de alguno de los novios, por vencimiento del plazo estipulado o por no haberse efectuado la condición puesta para la consumación del matrimonio.

III. El derecho canónico distingue dos clases o especies de esponsales: de futuro y de presente. Los primeros constituyen la verdadera promesa de matrimonio y los segundos son el matrimonio en sí. El decreto de Pío X, *Ne temere*, establece que los esponsales sólo serán válidos cuando fueren realizados en documento firmado por ambas partes y por el párroco u ordinario del lugar, o a falta de estos últimos, por dos testigos. En virtud de ellos las partes quedan obligadas a realizar el matrimonio; sin embargo, para los casos de incumplimiento por causa injustificada, sólo se tiene acción para el resarcimiento de daños.

En este derecho los esponsales pueden disolverse por mutuo consentimiento; por impedimento sobreviniente; por el transcurso del término fijado para la celebración del matrimonio; por culpa de otra parte, equiparándose al repudio de los romanos; por razones graves, y por dispensa de la Santa Sede.

IV. BIBLIOGRAFIA: FLORES BARROETA, Benjamín, *Lecciones de primer curso de derecho civil*, México, 1964, 2 vols.; GALINDO GARFIAS, Ignacio, *Derecho civil*: 2a. ed., México, Porrúa, 1976; GOMEZ DE LA SERNA, Pedro, *Curso histórico exegético de derecho romano*, Madrid, 1863, t. I; MARGADANT, Guillermo, *El derecho privado romano*: 4a. ed., México, Esfinge, 1971; ROJINA VILLEGAS, Rafael, *Derecho civil mexicano*, t. II, *Derecho de familia*; 5a. ed., México, Porrúa, 1980.

Alicia Elena PEREZ DUARTE Y N.